

RACISMO ESTRUCTURAL EN EL ÁMBITO RURAL

UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE SUS DINÁMICAS Y CONSECUENCIAS

Informe de resultados: conclusiones y recomendaciones

RACISMO ESTRUCTURAL EN EL ÁMBITO RURAL UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE SUS DINÁMICAS Y CONSECUENCIAS © 2025 por Coceder está licenciado bajo Creative Commons Atribución-NoComercial-NoDerivativos 4.0 International. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



www.coceder.org

Daniel CASTILLEJO MARTÍNEZ y
Jaume ESCRIVÀ RAMÍREZ
(dirección de la investigación)

Malena ALMARALES RODRÍGUEZ
(comunicación Coceder)

María José ILLERA SUÁREZ
(coordinación Coceder)

Juan Manuel POLENTINOS CASTELLANOS
(dirección-gerencia Coceder)

Edita: Confederación de Centros de Desarrollo Rural
COCEDER - Declarada de utilidad pública

C/ Fuente el Sol, 2 - Entreplanta 47009 Valladolid

info@coceder.org | www.coceder.org

Maquetación: Cargraf S.L.

ISBN: 979-13-991700-3-0

Todos los derechos reservados; prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, fotografías y demás contenidos sin autorización expresa del editor o propietario.

RACISMO ESTRUCTURAL EN EL ÁMBITO RURAL

UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE SUS DINÁMICAS Y CONSECUENCIAS

Daniel CASTILLEJO MARTÍNEZ y
Jaume ESCRIVÀ RAMÍREZ
(dirección de la investigación)

Malena ALMARALES RODRÍGUEZ
(comunicación Coceder)

María José ILLERA SUÁREZ
(coordinación Coceder)

Juan Manuel POLENTINOS CASTELLANOS
(dirección-gerencia Coceder)



✓ POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



www.coceder.org

Introducción _____	7		
1. Contextualización del estudio _____	9		
2. Contextualización geográfica _____	11		
3. Delimitación del ámbito rural. El por- qué de un estudio de estas características tan específico _____	15		
4. Marco conceptual y teórico. Una cla- rificación previa al análisis. _____	19		
4.1. Raza, etnia y racialización: fundamentos para comprender la alteridad _____	20		
4.2. Discriminación estructural: origen de todas las formas de discriminación _____	21		
4.3. Racismo institucional, administrativo y policial _____	21		
4.4. Racismo en el debate público y percepción social _____	22		
4.5. La clase social; el campo económico lo impregna todo _____	23		
5. Metodología y muestra seleccionada. Indicadores seleccionados _____	27		
5.1. Trabajo de Campo cualitativo: entrevistas abiertas para recoger los discursos de personas informantes cualificadas de las redes-actores formales de cada comarca _____	27		
5.2. Trabajo de Campo cualitativo: grupos de discusión para recoger			
relatos de los representantes de los perfiles sociales racializados en el ámbito rural _____	28		
5.3. Trabajo de campo cualitativo: entrevistas semiabiertas para recoger las dificultades de inclusión-participación de las personas racializadas en las zonas rurales de cada comarca. ____	31		
5.4. Muestra final, adaptaciones y desviaciones _____	31		
6. Contenido del estudio _____	41		
6.1. Aproximación cuantitativa. _____	41		
6.1.1. El Bierzo (León) _____	42		
6.1.2. Carrión de los Condes y el Bajo Carrión-Ucieza (Palencia) _____	42		
6.1.3. Verín (Ourense) _____	42		
6.1.4. Alt Maestrat (Castellón) ____	42		
6.1.5. La Safor (València) _____	42		
6.2. Análisis cualitativo. Dinámicas y consecuencias del racismo estructural en el ámbito rural ____	47		
6.2.1. Campo económico (laboral, recursos, vivienda, herencias) _____	47		
6.2.2. Los sectores laborales y sus condiciones _____	48		
6.2.3. Entre el estigma y el utilitarismo _____	52		
6.2.4. Vivienda _____	53		
6.3. Campo cultural (formación, ámbito académico) _____	54		

6.4. Campo social y campo simbólico _	58
6.5. Campo político y participativo ____	63
7. Conclusiones _____	71
8. Recomendaciones y buenas prácticas _	75
Bibliografía _____	77
Anexos _____	79
1. Guion entrevistas técnicos (previa)	79
1. Presentación y contextualización	79
2. Trayectorias migratorias y discriminación _____	79
3. Percepción y manifestaciones del racismo estructural _____	80
4. Acceso a la vivienda _____	80
5. Capital social y redes de apoyo ____	80
6. Administración y jerarquías sociales _____	81
7. Capital económico y condiciones laborales _____	81
8. Capital cultural y educativo ____	81
9. Capital simbólico y representación social _____	81
10. Estrategias de resistencia y buenas prácticas _____	82
11. Políticas públicas y propuestas de acción _____	82
12. Cierre y reflexiones finales ____	82
2. Guion entrevista a perfiles racializados (complementación) _	82

1. Presentación y contextualización	82
2. Trayectoria migratoria _____	82
3. Experiencias en el ámbito rural _	83
4. Acceso a la vivienda _____	83
5. Relaciones y apoyo en la comunidad _____	83
6. Oportunidades y participación en la comunidad _	83
7. Trabajo y economía _____	83
8. Educación y cultura _____	84
9. Reconocimiento y valoración ____	84
10. Soluciones y buenas prácticas ____	84
11. Políticas y propuestas _____	84
12. Cierre y agradecimiento ____	85
3. Guion Grupo de Discusión _____	85
1. Bienvenida y presentación ____	85
2. Trayectoria migratoria y cambios en la percepción del racismo _____	85
3. Influencia de la profesión y el estatus socioeconómico en la discriminación _____	85
4. Vivienda y acceso a recursos ____	86
5. Rol de las ONG, asociaciones y entidades del tercer sector ____	86
6. Estrategias de resistencia y cambios necesarios _____	87
7. Cierre y reflexiones finales ____	87
Agradecimiento: _____	87

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural –COCEDER– es una ONG de Acción Social y ámbito estatal que trabaja en el medio rural desde su creación, en 1991, junto con sus veinticuatro Centros de Desarrollo Rural (CDR) pertenecientes a nueve comunidades autónomas, los cuales funcionan de forma coordinada, solidaria y autónoma. La trayectoria de COCEDER, durante los años transcurridos desde su creación, ha experimentado cambios importantes que ha tenido que afrontar con dedicación, aprendizaje conjunto y recursos tanto económicos como humanos. Toda una red de centros que realizan su intervención en más de 400 municipios, llegando a una población de más de 70.000 personas habitantes del medio rural.

El trabajo que realiza COCEDER en sus territorios de acción es, entre otros, desarrollar programas, servicios y actividades de intervención social para promover la inclusión de la población rural en general y, en concreto, de la población rural que sufre más discriminaciones por su condición, como pueden ser mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con diversidad funcional o personas migrantes y/o refugiadas. El objetivo último de todos los programas e intervenciones es caminar hacia una igualdad de condiciones entre las personas que viven en el medio rural, con menos recursos y servicios, en comparación con la población urbana. Décadas de trabajo centrado en la inclusión social y los derechos de la población rural avalan su trayectoria.

La atención individualizada a personas migrantes o refugiadas, el asesoramiento y el acompañamiento en materia de extranjería, trámites administrativos y formación en lenguas oficiales, o la formación pre-laboral y la búsqueda de empleo, son algunas de las tareas que se llevan a cabo a través de distintos programas de intervención, tanto con las personas acabadas de llegar como con las que llevan años o generaciones asentadas en el territorio.

Las profesionales de COCEDER y de los diferentes CDR que trabajan con personas refugiadas y migrantes, en su proceso hacia la plena integración, se han encontrado con una serie de dificultades que impiden el asentamiento o el acceso a derechos y servicios básicos. Este factor, tan común en la realidad de cada caso atendido, ha llevado a preguntarse si estas dificultades son puntuales, si el ámbito rural es más inclusivo que el urbano, o si la inclusión social en las zonas rurales es más fácil que en los entornos urbanos para las personas migrantes.

En definitiva, y tratando de huir del relato idílico que generalmente se tiene sobre el medio rural, con esta investigación se pretende realizar un análisis en profundidad sobre la situación de las personas y comunidades migrantes y racializadas en el ámbito rural junto con las dificultades relacionadas en su proceso de asentamiento e integración. Así mismo, también se incorporará el testimonio del pueblo gitano como sujeto con más de 600 años de asentamiento en la península ibérica, ya que el imaginario colectivo que se tiene sobre esta población les aboca a un estatus de migrante permanente, enfrentándose a una segregación y exclusión de la vida pública que perdura aún hasta hoy día.

1. Contextualización del estudio

Más allá del ámbito rural y de las respectivas particularidades de cada zona, debemos poner atención al contexto global donde estamos inmersos. La extrema derecha parlamentaria europea ha realizado avances aumentado sus escaños hasta un 28,47% en los últimos años (Público, 2024).

En el ámbito político, son el principal actor que pone en entredicho los derechos sociales básicos, como la solvencia del estado de bienestar o las ayudas sociales para las capas más empobrecidas de la sociedad. Además de ser el principal actor en señalar a la población migrante como el problema central de todos los males económicos y sociales que asolan cada país. En muchos estados europeos esta opción cuenta con una representatividad suficiente en el parlamento como para determinar algunas de las tomas de decisiones políticas de los mismos (El País, 2025).

A pesar de las diferencias internas de cada partido, todos coinciden en la misma estrategia: la difusión de bulos y discursos de odio contra la población migrante o racializada, creando así un enemigo externo y desviando el sentido común general de las sociedades occidentales hacia posturas cada vez más excluyentes.

La campaña general de desinformación y odio que llevan a cabo estos y otros agentes políticos y sociales se materializa en muestras como que, en septiembre de 2024, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó que la inmigración llegó a ser la primera preocupación de la población española. Este resultado deja entrever una creciente preocupación, una posible canalización de las frustraciones hacia las minorías y un problema político que debe ser tratado para evitar consecuencias mayores,

Todo y el resultado concreto de las encuestas, hay una certeza material en que la con llegada de personas migrantes, y su regularización o no, responde a lógicas basadas en intereses económicos, es decir, a la necesidad del Estado de sostener la natalidad y una fuerza de trabajo capaz de emplearse en los puestos laborales que no son cubiertos por la población autóctona (Oxfam Intermón, 2025)

Es en este punto donde encontramos la máxima expresión de contradicción y el utilitarismo respecto de la condición migrante, y es que a la vez que se les criminaliza y deshumaniza de manera mediática, son imprescindibles para sostener muchas ramas de la economía que ya no son ocupadas por la población autóctona, así como los índices de natalidad, actualmente bajos en todas las sociedades occidentales. Es este factor de desamparo absoluto a la hora de acceder a medios y recursos de subsistencia estatales, obliga a la población migrante a sobrevivir en este país vendiendo su fuerza de trabajo a cualquier precio, en cualquier puesto y bajo cualquier condición (Oxfam Intermón, 2025). Es decir, si la población migrante depende únicamente del salario directo que le da un empresario para sobrevivir al día, ésta se ve forzada a aceptar las condiciones que sean, incluso cuando estén fuera de la legalidad estatal vigente o dentro de unos mínimos de salubridad y/o dignidad.

2. Contextualización geográfica

En el contexto europeo, las dinámicas migratorias actuales deben interpretarse a la luz de los procesos históricos de colonización y del lugar que Europa ocupa en la estructura del sistema-mundo y la expansión de la globalización. Tal como plantea Wallerstein (1974, 2004), la economía global se organiza en torno a una jerarquía de centro, semiperiferia y periferia, donde la circulación de personas y recursos responde a una división internacional del trabajo que reproduce desigualdades estructurales. La movilidad migratoria hacia Europa —y dentro de ella— es, en buena medida, una consecuencia de estas relaciones, que mantienen dependencias económicas, lingüísticas y culturales entre el centro europeo y las antiguas periferias.

Desde esta perspectiva, las causas de la migración hacia Europa no pueden reducirse a factores “individuales” o “humanitarios”, sino que responden a los desequilibrios estructurales del sistema-mundo capitalista. El desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2005) ha generado una geografía global de oportunidades profundamente asimétrica: mientras Europa concentra capital, tecnología y poder político, amplias regiones de África, Asia y América Latina permanecen subordinadas como periferias exportadoras de trabajo, materias primas o servicios externalizados. Las políticas comerciales, financieras y extractivas impulsadas desde el centro —como los acuerdos de libre comercio, la financiarización agrícola o el acaparamiento de tierras— producen desposesión, desempleo y desplazamientos forzados en los territorios periféricos. En este contexto, migrar hacia Europa se convierte en una estrategia de supervivencia ante la desigualdad estructural, pero también en una manifestación concreta de la dependencia histórica y de la movilidad forzada que sostiene la acumulación en el centro.

En el marco de la Unión Europea, la política migratoria combina la externalización del control fronterizo con estrategias internas de integración desiguales. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (Comisión Europea, 2020) y los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2022) ponen de relieve esta contradicción: mientras se refuerza el control sobre la movilidad, persisten las brechas en el acceso a derechos, empleo y vivienda para las personas migrantes y racializadas. Según la encuesta EU-MIDIS II (FRA, 2017), más del 39 % de las personas de origen africano y el 29 % de origen romaní declararon haber sufrido discriminación en los últimos cinco años.

En el medio rural, estas tensiones adoptan formas específicas. Los informes del Parlamento Europeo sobre la inversión en zonas rurales y cohesión territorial (European Parliament, 2021, 2025) y del Comité Europeo de las Regiones (European Committee of the Regions, 2023) señalan que las regiones rurales ocupan más del 80% del territorio europeo, pero siguen siendo periferias internas del sistema europeo: territorios con menor dotación de servicios,

baja densidad poblacional y fuerte dependencia de mano de obra migrante para sostener la producción agrícola, ganadera y de cuidados.

Desde la perspectiva del sistema-mundo, esta situación evidencia un traslado de las lógicas coloniales al interior del espacio europeo. Las zonas rurales funcionan como espacios semi-periféricos donde se concentran formas de trabajo precarizadas y racializadas, necesarias para mantener la acumulación en los centros urbanos y productivos. La migración hacia el campo europeo —condicionada por políticas laborales estacionales y regímenes de residencia restrictivos— refleja una dependencia estructural de la periferia interna respecto al centro.

Siguiendo a Harvey (2005), estas dinámicas también pueden entenderse como manifestaciones del desarrollo geográfico desigual, un mecanismo inherente al capitalismo que reconfigura continuamente el espacio para absorber crisis y sostener la acumulación. Europa produce, así, una geografía jerarquizada en la que ciertas regiones y poblaciones son sistemáticamente subordinadas para garantizar la competitividad del núcleo central. Los territorios rurales —especialmente aquellos dependientes de economías extractivas, agrarias o de cuidados— son ejemplos de esta acumulación por desposesión, donde el valor generado por el trabajo migrante se transfiere hacia los centros urbanos y financieros.

Los estudios recientes del Joint Research Centre (JRC, 2024) y del European Economic and Social Committee (EESC, 2023) subrayan además que, sin la llegada de población migrante, el declive demográfico rural sería aún más acusado. Sin embargo, la falta de infraestructuras, las condiciones de vivienda inadecuadas y la persistencia de estereotipos culturales y raciales impiden la plena integración social y política de estas comunidades.

Por su parte en el Estado español, los grupos más afectados por la discriminación racial o étnica tienden a ser la población gitana, las personas africanas y afrodescendientes, las personas musulmanas y la población migrante y sus descendientes (Red2Red, 2025). Una de las principales limitaciones para analizar la magnitud del fenómeno es la ausencia de datos estadísticos desagregados por origen étnico o racial, cuestión que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación, está comenzando a abordar mediante la futura Encuesta de Características Esenciales de la Población y la Vivienda. Este instrumento busca generar evidencia empírica para evaluar el racismo estructural y orientar políticas públicas de igualdad.

Las investigaciones recientes muestran patrones claros de discriminación interseccional, que se manifiestan en distintos ámbitos sociales y económicos:

- **Vivienda:** la discriminación en el mercado de alquiler y compra sigue siendo una de las expresiones más palpables del racismo estructural. El estudio Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales (Provivienda, 2022) evidencia cómo los prejuicios asociados al origen y a la supuesta precariedad económica limitan el acceso a una vivienda digna y consolidan situaciones de infravivienda y segregación residencial. El

Mapa estatal sobre discriminación racial en la vivienda (Cepaim, 2023) confirma la cronicación de estos asentamientos como única alternativa residencial para muchas personas racializadas, también en zonas rurales.

- Población gitana: sigue siendo el grupo más discriminado en España. Los informes anuales de la Fundación Secretariado Gitano (2021–2023) denuncian el aumento de los discursos de odio antigitanos, las expulsiones colectivas y su asociación con prácticas policiales o mediáticas estigmatizadoras.
- Población africana y afrodescendiente: diversos estudios (Barbosa et al., 2020; Cea & Vallés, 2021; Rocu et al., 2022) señalan la existencia de racismo estructural, violencia policial, segregación residencial y desigualdades laborales y educativas.
- Población musulmana: la islamofobia se manifiesta tanto en el discurso público como en el ámbito laboral. Las mujeres musulmanas, especialmente aquellas que utilizan vestimenta religiosa, son el grupo más expuesto (Aparicio & Doménech, 2020; OBERAXE, 2021).
- Población migrante y descendencia: a pesar del arraigo y la naturalización, persiste una segregación social y ocupacional (Iglesias, Rua, & Ares, 2020). Los hijos e hijas de personas migrantes registran niveles educativos y oportunidades laborales inferiores a los de la población autóctona (Aparicio & Rodríguez, 2022).

Desde una perspectiva estructural, estas desigualdades no son fenómenos coyunturales, sino manifestaciones locales de la jerarquía global del sistema-mundo. España ocupa una posición semiperiférica dentro de Europa (Wallerstein, 2004), lo que implica una doble dinámica: por un lado, actúa como frontera de contención y filtrado migratorio para el centro europeo; por otro, reproduce internamente su propia geografía desigual entre regiones, sectores productivos y grupos sociales.

En este sentido, el desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2005) se expresa en la fuerte concentración de riqueza, inversión y servicios en los grandes centros urbanos —Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia— frente a la dependencia económica, la precariedad laboral y el declive demográfico de amplias zonas rurales o industriales en reconversión. Estas periferias internas se sostienen, en buena medida, mediante la incorporación de mano de obra migrante en sectores de baja remuneración —agricultura, ganadería, cuidados, hostelería o construcción—.

El racismo estructural opera, por tanto, como un mecanismo funcional al mercado, asignando posiciones desiguales según criterios de origen, clase, género y etnicidad. La población racializada y migrante cumple un papel esencial en la reproducción de la economía española, pero lo hace desde una posición subordinada, precarizada y, con frecuencia, invisibilizada.

En el medio rural, estas dinámicas se intensifican. Los territorios agrarios del sureste peninsular, los enclaves hortofrutícolas de La Safor o las zonas vitivinícolas del norte funcionan como espacios de acumulación por desposesión (Harvey, 2003), donde la necesidad de competitividad

internacional se traduce en explotación laboral, informalidad y condiciones de vivienda inadecuadas. La concentración de trabajadores migrantes en asentamientos precarios —como los documentados en Almería, Huelva o Lleida— refleja cómo el modelo agroexportador español se apoya en una infraestructura racializada del trabajo.

3. Delimitación del ámbito rural. El porqué de un estudio de estas características tan específico

En el debate territorial contemporáneo español, el medio rural sigue ocupando una posición subordinada dentro de un entramado cultural, económico e institucional que ha sido construido, naturalizado y legitimado desde la ciudad. Con la modernidad, el espacio urbano adquirió centralidad política y simbólica: se convirtió en el lugar desde el que se definían los estándares de innovación, de productividad económica y de bienestar social. Ese desplazamiento del marco interpretativo conllevó que las áreas rurales quedaran situadas en una zona periférica del sistema, entendidas principalmente como territorio de soporte, proveedor de recursos y espacio de absorción de externalidades ambientales y sociales generadas por la concentración urbana.

Esta jerarquía no es únicamente material. También opera en el plano cognitivo y cultural. Las representaciones dominantes sobre el territorio han equiparado desarrollo con urbanización, modernidad con densidad poblacional y dinamismo social con centralidad metropolitana. Este proceso ha producido una asimetría simbólica: lo urbano se sitúa como marco de referencia y las instituciones —en sus diseños normativos, técnicos y administrativos— se han configurado asumiendo ese patrón como el estándar universal. Así, el medio rural aparece a menudo representado como espacio atrasado, residual o “desajustado” respecto de un modelo urbano que se considera legítimo “por defecto”.

Sin embargo, la evolución del medio rural español en la segunda mitad del siglo XX fue compleja y no puede reducirse a estereotipos. Tras décadas de éxodo hacia las grandes ciudades (especialmente entre los años 50 y 70), el campo español experimentó, a partir de los 70, procesos claros de transformación socioeconómica: industrialización difusa, mecanización agrícola, expansión de los servicios, desarrollo de polígrafos comarcales, aumento de la movilidad cotidiana y penetración progresiva de los medios de comunicación de masas. Esto supuso una cierta “urbanización social” del entorno rural: estilos de vida, consumos culturales y expectativas vitales se hicieron más cercanos al patrón urbano. Aun así, las formas de asentamiento, los ritmos demográficos, la estructura de oportunidades laborales y las condiciones de acceso a derechos sociales siguieron siendo distintas.

La clave es que los marcos institucionales no han evolucionado al mismo ritmo que la realidad social. Buena parte de las políticas públicas continúan diseñándose, presuponiendo densidades, escalas y habitabilidades típicas del espacio urbano. Esto condiciona la provisión de servicios esenciales (sanidad primaria, educación, transporte público, conectividad digital) y

afecta directamente a las oportunidades vitales de la población rural, generando desigualdad territorial de base. También se observa en la regulación del suelo, en la gestión del agua, en los criterios de eficiencia de la inversión pública y, de forma especialmente visible, en el campo de la vivienda rural: normativas concebidas para entornos urbanos acaban siendo un obstáculo en municipios pequeños que no encajan en las métricas de densidad, demanda o mercado que exigen estos instrumentos.

Las dinámicas socioterritoriales que atraviesan el medio rural hoy no son producto de su supuesta “falta de modernidad”, sino de un sistema institucional y discursivo que ha construido una normalidad urbana y la ha proyectado como patrón universal. La experiencia rural —en un país con grandes diferencias orográficas, climáticas y demográficas entre territorios— se encuentra así obligada a operar bajo criterios que no reconocen su especificidad.

Por eso, el análisis del medio rural contemporáneo requiere entender que la desigualdad territorial no solo es consecuencia de procesos económicos, sino también de marcos interpretativos y normativos que se han consolidado desde el centro urbano. Y es precisamente en ese cruce —entre estructura material y mirada cultural— donde pueden interpretarse muchos de los retos actuales del rural español: la despoblación selectiva, la concentración del empleo cualificado, la dependencia de cadenas de valor externas o las dificultades para acceder a vivienda asequible y adecuada. En este sentido estudiar el racismo en el medio rural español es pertinente porque la mayoría de diagnósticos existentes se han construido bajo marcos interpretativos pensados desde lo urbano. La discusión pública y académica se ha centrado en las ciudades, donde la diversidad es más visible y donde las instituciones cuentan con estructuras formales para registrar, canalizar y nombrar los conflictos. Ese enfoque ha producido un vacío analítico respecto a las dinámicas de racialización que se desarrollan en escalas sociales pequeñas, con densidades poblacionales reducidas y con sistemas de relación cara a cara. La ausencia de información sobre estos espacios no significa ausencia de racismo, sino ausencia de herramientas para detectarlo, clasificarlo y entenderlo.

En gran parte del medio rural, la incorporación de población migrante está profundamente vinculada al sostenimiento actual del tejido económico local. La agricultura intensiva, determinados servicios vinculados a cuidados, hostelería o tareas de mantenimiento del territorio dependen crecientemente de mano de obra extranjera. Las relaciones sociales que se generan en torno a estas actividades no responden a lógicas anónimas o fragmentadas, como ocurre en la ciudad, sino a marcos de convivencia más directos, donde las jerarquías sociales se negocian en proximidad y donde la reputación y la mirada comunitaria tienen un peso estructurante. En este contexto, la racialización se expresa frecuentemente a través de mecanismos informales —rumor, sospecha, reputación colectiva— que pueden consolidarse como fronteras simbólicas muy persistentes, precisamente porque no están institucionalizadas ni tematizadas desde el lenguaje de los derechos.

A ello se añade que las políticas públicas antidiscriminatorias vigentes están diseñadas desde parámetros urbanos: los dispositivos administrativos, los protocolos de actuación y los indicadores de seguimiento han sido pensados para contextos donde hay densidad institucional

y donde existe un ecosistema de organizaciones especializadas. En los pueblos pequeños, en cambio, la capacidad institucional es limitada, la denuncia social es más costosa y el conflicto tiende a resolverse en circuitos informales. La falta de adecuación metodológica entre instrumentos urbanos y realidades rurales genera una invisibilización estructural: lo que no encaja en el marco urbano simplemente no se registra.

Por todo ello, estudiar el racismo en el ámbito rural no implica desplazar la cuestión del urbano, sino ampliar el campo de análisis para incluir territorios donde la desigualdad se articula de manera diferente, en ritmos y formatos distintos. Analizar estas dinámicas rurales contribuye no solo a completar el mapa de la discriminación racial, sino también a comprender cómo se producen y sostienen las jerarquías sociales en espacios donde la pertenencia comunitaria, la cercanía y la mirada vecinal operan como dispositivos de inclusión diferenciada. La ruralidad permite observar el racismo no como excepción ni como “residuo”, sino como una dimensión constitutiva de las formas actuales de organización territorial.

4. Marco conceptual y teórico. Una clarificación previa al análisis.

Si nos centramos en las definiciones de los diccionarios vemos como muchos optan por una definición de racismo basada en la exaltación y superioridad de una raza o grupo étnico sobre otros. La comisión europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa ya expone expresiones cotidianas, académicas o políticas explícitas o implícitas. Pero tal y como afirman Buraschi y Aguilar (2019) tener una definición de racismo cerrada es difícil e inoperativo, ya que en la evolución del tiempo no se adapta para definir y analizar la realidad cambiante. Para estos autores el racismo es un sistema de dominación y de inferiorización de un grupo sobre otro basado en la racialización de las diferencias, en el que se articulan las dimensiones interpersonal, institucional y cultural. Se expresa a través de un conjunto de ideas, discursos y prácticas de invisibilización, estigmatización, discriminación, exclusión, explotación, agresión y despojo (Aguilar y Buraschi, 2016: 34).

Para Mellino (2021) siguiendo el trabajo de Goldberg cuando se percibe el racismo como una actitud cultural o constitutivo del ser humano se corre el riesgo de naturalizar o universalizar dichas actitudes. Puede caer en un terreno pantanoso de no saber o poder identificar que actitudes son discriminatorias y cuales no, generando discursos como racismo contra blancos, antieuropeos etc. Este tipo de concepciones invisibilizan los efectos sociales y materiales, señalando a los sujetos y no a la sociedad, a las expresiones e identidades culturales y a no al modelo socioeconómico.

Como afirma Grosfoguel “En muchas ocasiones confundimos la forma particular de marcar el racismo en una región del mundo con la definición universal exclusiva del racismo” (p.93, 2012). Es decir, asumir que en todos los territorios tienen la misma forma de delimitar el racismo, este universalismo nos puede llevar a conclusiones como que en otras zonas no existe racismo, ya que no se materializa de la misma manera que se concibe en nuestra zona.

Para Fanon, el racismo es una jerarquía global sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos (Grosfoguel, 2012). Por tanto, todas las personas consideradas por debajo de lo humano, siendo las personas privilegiadas la que ponen el límite en el umbral según la zona y el contexto sus derechos son cuestionados y negados. Este proceso en el contexto actual se ve claramente en cómo se pone el foco en cierta población como los etiquetados como mena, las menores extranjeras no acompañadas

Algunas expresiones de racismo son sutiles o invisibilizadas ya que afectan a las capas poblacionales más precarizadas y empobrecidas, pero también por la falta de entidades o protocolos para registrar dichas discriminaciones. El racismo burocrático y administrativo es un elemento central en las personas migradas, la ley de extranjería y los requisitos establecidos para la regularización son un ejemplo de la dificultad que supone el ejercicio de los derechos básicos. La falta de citas para el asilo vulnera derechos humanos, genera un negocio en la venta de citas, empadronamientos, contratos y todo requisito necesario debido a la dificultad de conseguir los documentos acreditativos (Camacho, J. 2022), la falta de citas en extranjería son una constante.

La imposibilidad de regularización de las personas migrantes significa invisibilizar a una parte de la población obstaculizando o negando los derechos básicos. Otros ejemplos de discriminación burocrática son la imposibilidad de abrir una cuenta corriente, acceder a ayudas públicas como el ingreso mínimo o renta valenciana de inclusión, acceso la formación o realizar cualquier trámite de un organismo público. Según el informe anual de la oficina de atención víctimas del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica (CEDRE) durante el 2024 se registraron 323 incidentes de discriminación en la administración pública.

El análisis sociológico del racismo, la xenofobia y la discriminación en el medio rural requiere un marco conceptual que clarifique las categorías empleadas y permita comprender los procesos históricos, políticos y sociales que estructuran la desigualdad. Conceptos como raza, etnia, racialización, racismo, clase social y discriminación estructural se articulan de forma interdependiente y deben ser definidos con precisión para sustentar el análisis.

4.1. Raza, etnia y racialización: fundamentos para comprender la alteridad

La literatura académica muestra que la construcción sociohistórica de la alteridad ha girado en torno a dos categorías centrales: la raza y la etnia. Tal como señala Parella (2020), raza y racismo son realidades distintas: mientras que la raza es una construcción social cambiante, históricamente vinculada a diferencias físicas, pero no reducible a ellas, el racismo constituye un sistema de dominación basado en relaciones de poder.

Aunque la biología ha descartado la existencia de razas humanas, el concepto sigue operando socialmente. Desde una perspectiva sociológica, la raza funciona como una categoría ideológica que legitima desigualdades estructurales (Giddens, 2017). De ahí la relevancia de emplear el concepto de racialización (Giddens, 2017; RED2RED, 2025), que permite describir cómo determinados grupos son contruidos como “otros” a través de relaciones de poder que asignan significado político a las diferencias.

Frente a las connotaciones biologicistas de la idea de raza, la noción de etnicidad resulta más útil al aludir a un tipo de identidad social vinculada al linaje, la cultura, la lengua o la nación (Giddens, 2017). Los grupos étnicos se constituyen como comunidades imaginadas, cuyos límites se construyen simbólicamente.

Otro elemento fundamental para el análisis es la clase social, en el más adelante se entrará, entendida como el eje estructural de exclusión que determina el acceso a los medios de producción, a los recursos y a las oportunidades (Wright, 2010). Wright (2018) distingue dos niveles:

las posiciones en las relaciones de producción (dominación y explotación),

las posiciones en el mercado (acceso desigual a rentas y oportunidades)

Estas dinámicas se articulan con lo que Bourdieu (1997) denomina campos —espacios sociales con reglas propias donde los actores compiten por diferentes formas de capital (económico, cultural, simbólico y social)—, lo que permite observar cómo la clase opera más allá del ámbito estrictamente económico. El concepto de campo social es clave, ya que servirá para analizar por separado los diferentes ámbitos de la vida social y como el racismo opera en cada uno de ellos.

4.2. Discriminación estructural: origen de todas las formas de discriminación

Todas las expresiones de discriminación —racismo, xenofobia, clasismo o antigitanismo— derivan de una discriminación estructural, entendida como una realidad sistémica basada en desigualdades históricas con raíces culturales, institucionales y económicas (RED2RED, 2025; Wright, 2010). Se manifiesta cuando determinados grupos son privados de oportunidades cotidianas (Giddens, 2017).

La definición clásica de racismo como exaltación de superioridad de una “raza” resulta insuficiente. Autores como Aguilar y Buraschi (2016, 2019) argumentan que el racismo es un sistema de dominación e inferiorización basado en la racialización de las diferencias, articulado en dimensiones interpersonal, institucional y cultural. Este sistema produce estigmatización, exclusión, explotación, violencias y despojo

Mellino (2021), siguiendo a Goldberg, advierte del riesgo de naturalizar el racismo cuando se entiende como actitud individual y no como estructura social, lo que genera discursos como el “racismo contra blancos” que invisibilizan los efectos materiales del racismo real. En la misma línea, Grosfoguel (2012) destaca que las formas particulares de racismo no deben confundirse con su definición universal, ya que varían según contextos sociales e históricos.

Desde Fanon, el racismo forma parte de una jerarquía global de lo humano, producida por el sistema moderno/colonial y reproducida por las instituciones. Este marco permite entender procesos actuales de deshumanización como el tratamiento mediático y político hacia menores migrantes no acompañados o la normalización de miles de muertes en rutas migratorias

4.3. Racismo institucional, administrativo y policial

El estudio remarca la dificultad de cuantificar las discriminaciones cotidianas por su carácter sutil, invisibilizado y por la ausencia de protocolos de registro. Una dimensión crucial es el

racismo burocrático y administrativo, visible en: obstáculos para la regularización y la ley de extranjería, falta de citas para asilo, empadronamiento o trámites esenciales (Camacho, 2022), dificultades para abrir cuentas bancarias o acceder al Ingreso Mínimo Vital o a la Renta Valenciana de Inclusión, discriminaciones registradas por el CEDRE (2024) y por servicios como Igualdad.

Estas prácticas generan un efecto de exclusión sistemática, especialmente hacia personas migrantes o del pueblo gitano.

En el ámbito policial, destacan los controles por perfil racial, sin datos oficiales, pero ampliamente documentados. Según investigaciones de la Universitat de València, las personas gitanas son identificadas 10 veces más que las caucásicas, las magrebíes 7,5 veces y las afro-latinoamericanas 6,5 veces. Estos controles alimentan prejuicios y actúan como antesala de abusos posteriores, acompañados de comentarios racistas, cuestionamiento de testimonios y uso desproporcionado de la fuerza.

La infradenuncia se explica por la situación administrativa, el miedo, la falta de confianza institucional y el sesgo jurídico estructural. La blanquitud como categoría analítica revela cómo operadores jurídicos —en su mayoría blancos— reproducen sesgos que dificultan la empatía, influyen en la valoración de pruebas o condicionan la presunción de inocencia (Granados y Richi, SOS Racisme 2024).

El sesgo inconsciente produce penas más duras hacia personas racializadas, especialmente del pueblo gitano, reforzando estereotipos de criminalidad (Rights International Spain; Ruiz, 2018).

Este patrón se refleja también en la sobrerrepresentación de personas migrantes y gitanas en prisión (Anglo, 2022), en la existencia de CIEs como dispositivos de control migratorio y en la larga tradición de leyes antigitanas (F. Garcés, 2016).

4.4. Racismo en el debate público y percepción social

El racismo suele aparecer en el debate mediático solo ante episodios extremos —agresiones, cánticos racistas en estadios, actuaciones policiales desproporcionadas— y se presenta como una cuestión puntual, aislada o fruto del desconocimiento. Esta narrativa evita reconocer que el racismo es un mecanismo político y social, con efectos cotidianos sobre la vida de las personas racializadas, especialmente en contextos rurales donde la invisibilización es mayor.

Entender el racismo como un fenómeno estructural y multidimensional permite analizar prácticas cotidianas difíciles de cuantificar, pero esenciales para comprender la experiencia de las personas racializadas. Aspectos como la discriminación administrativa, los sesgos en la atención institucional, los controles policiales o la precariedad laboral etnificada forman parte de un mismo entramado social que condiciona las oportunidades y derechos de estos grupos.

4.5. La clase social; el campo económico lo impregna todo

Un elemento clave que destaca para entender la realidad que se pretende analizar es el de clase social. En este, habrá que detenerse un poco más. La clase social, seguramente, sea el elemento de exclusión más importante ya que priva de los medios de producción y, por tanto, de la capacidad de acceso al trabajo y a otros recursos derivados (Wright, 2010).

La clase social, se puede dar en dos niveles y que el sociólogo Wright (2018) integra dentro de su análisis. Por un lado, encontramos todo aquello que tiene que ver las posiciones dentro de las relaciones de dominación y explotación en la producción y que genera conflictos sobre el control de los medios de producción (conflicto entre trabajadores y empresarios clásico), por otro se encuentra las posiciones en las relaciones de mercado y que genera conflictos sobre las rentas y la distribución. Dicho de otro modo, el acaparamiento de determinados grupos sociales de oportunidades y recursos y, por consiguiente, los mecanismos de reproducción que se generan para mantener la posición de privilegio de éstos establecen clases sociales diferenciadas.

La clase social, por tanto, no solo opera en el ámbito puramente socioeconómico, si no que los campos culturales, simbólicos y sociales también son importantes. Para entender a que nos referimos con campos se debe entender la posición de Bourdieu (1997) respecto a esto, un campo es un espacio social específico donde las personas interactúan, compiten y luchan por diferentes tipos de poder o recursos simbólicos, como el prestigio, el conocimiento o la influencia. Cada campo (por ejemplo, el arte, la ciencia, la política) tiene sus propias reglas, valores y jerarquías, y quienes participan en él deben aprender a moverse según esas normas para tener reconocimiento o poder. Para el presente análisis se utilizarán los campos económico, cultural, simbólico y social.

Para entender la estructura de clases en el siglo XXI el propio Wright (2018) propone una serie de clasificaciones actualizada a la realidad laboral y social actual, en este sentido nos habla de:

- Clase capitalista extremadamente rica y altos ejecutivos con pocas restricciones de poder.
- Clase media históricamente numerosa y estable, con educación superior, formación técnica, poder adquisitivo, etc.
- Una clase obrera que se caracterizaba por unos sectores muy sindicalizados, pero en declive.
- Un sector pobre y precario de la clase obrera caracterizado por bajos salarios, empleo inseguro y poca protección.
- Un sector de la población marginado y empobrecido, viviendo en condiciones extremadamente difíciles.
- Una pauta de interacción de raza y clase en que los trabajadores pobres y la población marginada están desproporcionalmente compuestos por minorías étnicas.

Justamente, para definir las minorías o los grupos étnicos minoritarios en sociología se emplea para referirse a aquellos grupos étnicos desfavorecidos en relación con el grupo dominante (grupo que tiene más riqueza, poder, prestigio, etc.). En este sentido el término “minoría” no necesariamente es literal (Giddens, 2017), ya que pueden existir poblaciones donde el grupo subordinado no necesariamente es minoritario. La etnia y la clase social se interrelacionan dando espacio a categorías sociales diferenciadas y a subordinar todavía más determinados grupos.

Esto ha dado paso a conceptos como el de “trabajador etnificado” donde autores como Cánovas (2022) afirman que es aquel que tiene una identidad étnica diferente a la mayoritaria y que ocupa una posición subordinada en el mercado laboral.

El trabajador etnificado puede ser un inmigrante extracomunitario o una minoría que sufre discriminación, segregación y explotación por razón de su procedencia, cultura, religión o color de piel. El trabajador etnificado forma parte de un colectivo que se caracteriza por la precariedad, la informalidad, la invisibilidad y la vulnerabilidad en el mundo del trabajo. Además, este concepto da cabida a el fenómeno por el cual determinadas étnicas o grupos nacionales se “especializan” en determinadas ocupaciones.

En cuanto al ámbito de las discriminaciones se deben distinguir entre: el racismo, la xenofobia, el clasismo, el antigitanismo y entre qué es discriminación y que es la discriminación estructural. Para empezar a definir habrá que entender que todas las diferentes fuentes de discriminación nacen de una; la discriminación estructural.

La discriminación estructural se entiende desde un punto de vista sociológico como una relación social una realidad sistémica que perpetua la discriminación social (RED2RED, 2025). Esta discriminación se basa en desigualdades históricas que afectan a grupos racializados y a las clases sociales más bajas de forma histórica. La discriminación estructural se enraíza en patrones y normas culturales, así como en relaciones sociales desiguales que tienden a perpetuarse. Esto crea desventajas sistémicas para ciertos grupos sociales racializados (RED2RED, 2025) a lo que se suman condiciones socioeconómicas desiguales (Wright, 2010). La discriminación, en este sentido, según Giddens (2017) se puede apreciar en actividades que privan a los integrantes de un determinado grupo social de las oportunidades que otros disfrutan.

Los objetivos de la investigación parte de la necesidad por parte de COCEDER y de los distintos Centros de Desarrollo Rural de acercarse de forma empírica a la realidad social que gestionan.

Esta idea, la de poder diagnosticar y leer la realidad sobre cómo opera el racismo en el ámbito rural, se acaba traduciendo en diferentes objetivos:

El objeto de estudio del presente proyecto de investigación propuesto es la percepción del racismo estructural al ámbito rural, siendo la población objetivo personas racializadas y grupos poblacionales y étnicos de mayor implantación en nuestro país y que agrupan a personas africanas, afrodescendientes, europeos del este, nativas americanas, latinoamericanas blancas,

árabes, asiáticas y del Pueblo Gitano que residen, trabajan y socializan en el ámbito rural del estado español y que pueden llegar a sufrir discriminación por su condición racializada. La intención de la investigación es, por tanto, comprobar las especificidades de la discriminación y el racismo estructural en el ámbito rural.

Los objetivos de esta investigación se centran en los siguientes ámbitos:

- Definir el concepto de racismo estructural en el ámbito rural y sus causas. - Investigar cómo el capital social (redes de relaciones y conexiones sociales) influye en las experiencias de racismo estructural de las personas racializadas en comunidades rurales, y si la falta de este influye en su discriminación.
- Analizar cómo el racismo estructural afecta el capital económico (recursos financieros), capital cultural (educación y conocimientos) y capital simbólico (prestigio y reconocimiento) de las personas racializadas en áreas rurales, y las implicaciones de estas en su vida cotidiana.
- Investigar cómo las relaciones de poder dentro del campo rural perpetúan el racismo estructural, y cómo estas dinámicas afectan las oportunidades de las personas racializadas.
- Investigar qué factores contribuyen a la perpetuación del racismo estructural

5. Metodología y muestra seleccionada. Indicadores seleccionados

Para abordar la problemática y los objetivos de la investigación se ha llevado a cabo un acercamiento cualitativo, poniendo en el centro del trabajo de campo las entrevistas y los grupos de discusión. El optar por esta metodología tenía dos intenciones principales, por un lado, se conseguía poner en el centro los discursos y las percepciones por parte de la población local (tanto racializada como no racializada). Por otro lado, el ámbito rural es especialmente un lugar de acercamiento cualitativo, las muestras son pequeñas por su baja densidad poblacional y un enfoque cuantitativo no permitiría tampoco recoger todos los matices que en él se dan.

Para la realización de la metodología y de la muestra se ha establecido un sistema de indicadores clave (o variables) que se ha llevado a cabo a partir de una aproximación cuantitativa previa y se ha ido ajustando con las entrevistas a profesionales. Para poder detectar perfiles se han revisado estudios previos como; El impacto del racismo en España (Equipo Investigador de Red2Red, 2025) y Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España (Colectivo IOÉ, 2010), con el objetivo de buscar instrumentos metodológicos y de diseño de muestra cualitativas validadas empíricamente.

La propuesta y diseño inicial de la metodología fue la siguiente:

5.1. Trabajo de Campo cualitativo: entrevistas abiertas para recoger los discursos de personas informantes cualificadas de las redes-actores formales de cada comarca

6-7 Entrevistas por centro

Perfil: personas cualificadas que se dedican a la intervención con personas de origen migrante/racializadas. Pueden ser técnicos o líderes comunitarios (asociaciones, sindicatos, ONG, etc).

Entrevistas semiestructuradas que pueden servir de entrevistas exploratorias.

Objetivo manifiesto: buscar las barreras administrativas, sociales, económicas, etc. Que perpetúan la discriminación de las personas migrantes en contextos rurales desde una perspectiva especializada.

Objetivo latente: detectar posibles perfiles y contactos que nutran los grupos de discusión.

5.2. Trabajo de Campo cualitativo: grupos de discusión para recoger relatos de los representantes de los perfiles sociales racializados en el ámbito rural

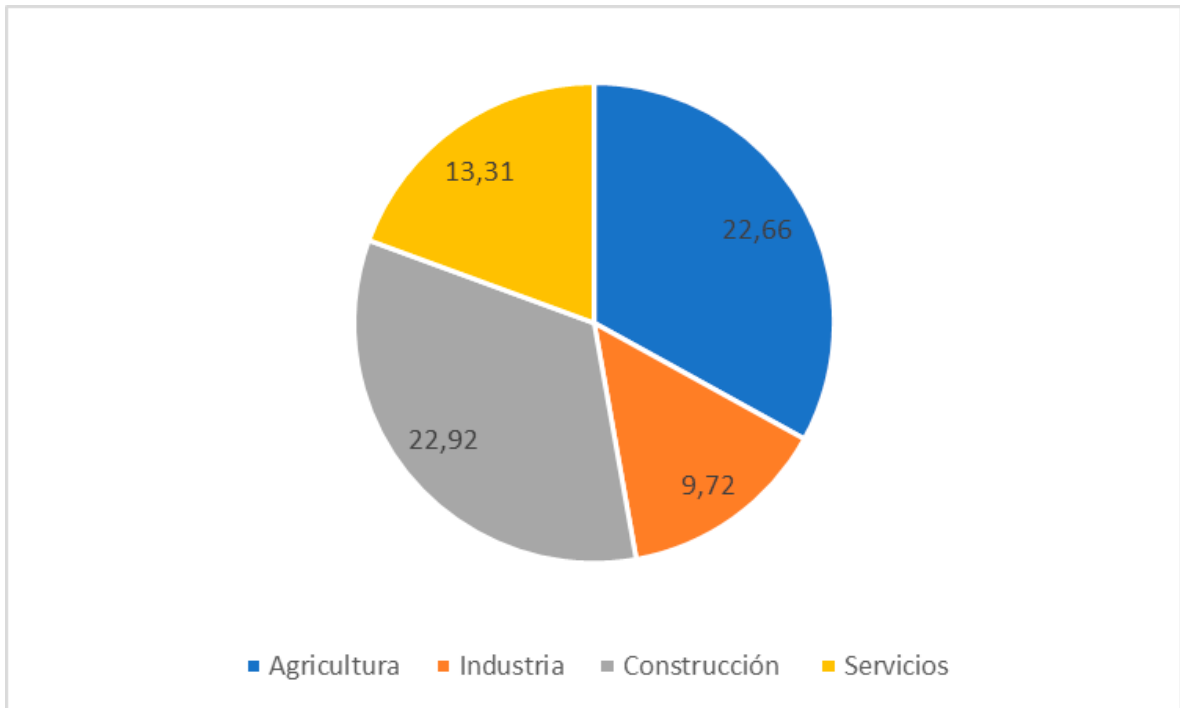
La propuesta metodológica principal e inicial es que el peso de la investigación recaiga sobre los Grupos de Discusión (GD), en base a investigaciones anteriores como “Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España. Exploración cualitativa” (IOÉ, 2010), se establece que los GD resultan claves para entender e interpretar los objetivos de la investigación.

Para el diseño de los GD se debe tener en cuenta que el trabajo de campo se realizará en 6 Centros de Desarrollo Rural (CDR) repartidos en 5 provincias y 3 comunidades autónomas. Cabe recordar que la representatividad de los GD no es de tipo estadístico, esto es, lo que busca es una muestra de tipo estructural. Se centra en buscar las posiciones más típicas, los discursos que generan consensos y disensos y como circulan de forma intersubjetiva éstos. Por esto será la técnica más conveniente teniendo en cuenta que una de las limitaciones del estudio es que no tiene implementación territorial amplia pero también es su potencial, ya que, para reconocer determinadas posiciones, no la necesita.

Para el diseño de los GD es importante reconocer qué variables son las necesarias para poder diseñar el perfil de los participantes. Las variables, en este sentido, no son al azar ni pretenden serlo. Tras una revisión bibliográfica de anteriores estudios que compartían algunos de los objetivos de nuestra investigación (IOÉ, 2010), se ha visto que para poder diseñar los GD hay que tener en cuenta dos variables principales: la procedencia de los migrantes y el momento de la trayectoria migratoria. Esto permite cierta homogeneidad interna y heterogeneidad externa, fomentando la heterogeneidad inclusiva de los GD. A parte habrá que tener en cuenta variables más clásicas como estatus socio-económico, sexo, edad, estado civil y estudios, así como la situación administrativa.

Algunos de los sectores laborales que, a partir de la revisión de datos secundarios se ha detectado que pueden tener relevancia han sido los siguientes; agricultura, industria, construcción y servicios.

Tabla1. Ocupados extranjeros por sector económico en España (2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Como se puede observar en la Tabla1, aquellos sectores que concentran mayor mano de obra extranjera son la construcción y la agricultura, seguido de los servicios. Una de las sospechas a la hora de analizar esta variable es que el sector servicios está infrarrepresentado en las estadísticas ya que mucho de este tiene tasas de contratación irregulares muy altas, por lo que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar los GD.

También se establecieron tres tipos de situación administrativa o momentos de la trayectoria, la idea, basada en estudios anteriores como “Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España. Exploración cualitativa” (Colectivo IOE, 2010) así como en la propia experiencia de la organización COCEDER en intervención con personas extranjeras, ha permitido reconocer las siguientes:

- 1.** Pre-migración. Aquellas personas que por estar en una situación de recién llegadas o un proceso muy inicial no pueden ser consideradas asentadas.
- 2.** Asentamiento. Aquellas personas asentadas en el territorio, pero con una regularización reciente, con fuertes lazos internas con sus comunidades de referencia.
- 3.** Post-migración. Personas en situación estable, asimilados o descendiente de migrantes pero leídos como racializados.

Se distinguió también entre Comunitarios y No-Comunitarios para poder establecer mejor los perfiles entre aquellas personas que provienen del ámbito de la UE y aquellas que no. También se diseñaron grupos con perfiles concretos que interesaba investigar teniendo en cuenta la experiencia previa de la organización, así como se reservó uno específicamente para la comunidad gitana.

La distribución de perfiles se hizo después de entrevistas previas con los profesionales de cada uno de los Centros de Desarrollo Rural para conocer las características de la comarca investigada y sus potenciales perfiles.

Nº GD	Procedencia	Momento de la Trayectoria	Situación Administrativa	Sector Laboral	Estatus Socioeconómico	Contexto Territorial	Provincia	CDR
GD1	No comunitarios	Pre-migración (eventualidad)	Irregularidad reciente o en proceso de regularización	Diversos sectores	Precariado		Valencia	La Safor
GD2	No comunitarios	Asentamiento	Regularizados recientemente (≤ 5 años)	Diversos sectores	Precariado y estables		León	AFA BIERZO
GD3	No comunitarios	Post-migración	Situación estable de regularidad (≥ 10 años)	Cuidados/ hostelería	Estables		Palencia	Carrión de los Condes
GD4	Comunitarios (UE sin España, principalmente Rumanía)	Asentamiento	Situación regular, pero con precariedad laboral	Diversos	Estable/ Precaria)20do		Castellón	Alt Maestrat
GD5	Extracomunitarios	Retornados (nietos)	Regularizados con trabajo estable y familias en España	Diversos sectores	Diversas situaciones		Ourense	Portas Abertas
GD6	Extracomunitarios	Post-migración	Situación de plena integración y acceso a nacionalidad	Pequeños empresarios (hostelería, construcción)	Autónomos		León	AFA Bierzo
GD7	Mujeres de orígenes América Latina	Pre-migración/ Asentamiento	sector de cuidados	Cuidados	Precariado		Castellón	Alt Maestrat
GD8	Descendientes de inmigración extranjera	Segunda generación (nacidos en España)	Ciudadanía española	Diversos sectores	Estudiantes/ precarios (jóvenes)		León	AFA BIERZO
GD9	No comunitarios	Mujeres en proceso de asentamiento	Irregularidad o situación precaria	Cuidados	Precariado		Ourense	Portas Abertas
GD10	No comunitarios y comunitarios	Asentados	Mixto en situación regular/ irregular	Diversos sectores	Precariado y estables		Palencia	Carrión y Ucieza
GD11	Diversos orígenes	Asentamiento y post-migración	Mixto en situación regular/ irregular	Construcción y sector primario	Precariado y estables	Periurbano	Valencia	La Safor
GD12	Diversos orígenes	Asentamiento y post-migración	En situación regular	Pequeños empresarios	Autónomos	Rural	Palencia	Carrión y Ucieza

Nº GD	Procedencia	Momento de la Trayectoria	Situación Administrativa	Sector Laboral	Estatus Socioeconómico	Contexto Territorial	Provincia	CDR
GD13	Población Gitana	No aplica (población nacional)	Ciudadanía española	Diversos sectores	Precariado, estables y pequeños empresarios	Contextos rurales y periurbanos	Valencia	La Safor

5.3. Trabajo de campo cualitativo: entrevistas semiabiertas para recoger las dificultades de inclusión-participación de las personas racializadas en las zonas rurales de cada comarca.

6-7 por centro

A perfiles racializados que complementen los GP. En el GP detectaremos discursos que o bien se han quedado fuera o bien hemos detectado que pueden servir para complementar algunas matizaciones. Estas entrevistas se harán una vez hayan pasado los GP.

5.4. Muestra final, adaptaciones y desviaciones

Todo y el diseño original de la metodología y la muestra, se ha ido adaptando la muestra conforme ha avanzado la investigación, así como sorteando las diferentes desviaciones. Finalmente, este ha sido el resultado de la muestra:

AFA BIERZO (León)

1. ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS A PERFILES TÉCNICOS

Nº	FECHA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PERFIL	CORTE DE EDAD	SEXO
1	28/02/25	Asociación	Comarcal	Abogado	Adulto	H
2	03/03/25	Administración	Comarcal	Educadora Social	Adulta	M
3	06/03/25	Entidad Local	Bembibre	Educadora Social	Adulta	M
4	07/03/25	CEAS	Villafranca	Educadora Social	Adulta	M
5	11/03/25	Asociación Internacional	Colombia	Trabajadora Social	Adulta	M
6	13/03/25	CEAS	Ponferrada	Trabajadora Social	Adulta	M
7	21/03/25	Consejo Comarcal	Comarcal		Adulta	M
8	27/03/25	CDR	Comarcal	Coordinadora	Adulta	M

2. GRUPOS DE DISCUSION CON PERSONAS MIGRANTES

Grupo de Discusión con Personas Caboverdianas de 1ª y 2ª Gen.

Nº	FECHA	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	SITUACION	CORTE DE EDAD	SEXO
1	29/03/25	Bembibre	Voluntaria	Regular	Adulta	M
2	29/03/25	Bembibre	Voluntario	Regular	Adulto	H
3	29/03/25	Bembibre	Voluntario	Regular	Adulto	H
4	29/03/25	Bembibre	Voluntario	Regular	Adulto	H
5	29/03/25	Bembibre	Voluntaria	Regular	Adulta	M
6	29/03/25	Bembibre	Voluntaria	Regular	Adulta	M
7	29/03/25	Bembibre	Voluntario	Regular	Adulto	H

Grupo de Discusión con Personas Cubanas, nacionalizadas e irregulares.

Nº	FECHA	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	SITUACION	CORTE DE EDAD	SEXO
1	11/06/25	Cuatrovientos	Voluntaria	Irregular	Adulta	M
2	11/06/25	Cuatrovientos	Voluntario	Irregular	Adulto	H
3	11/06/25	Molinaseca	Voluntaria	Regular	Adulta	M
4	11/06/25	Molinaseca	Voluntario	Regular	Adulto	H

3. ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADA A PERFILES RACIALIZADOS

Nº	FECHA	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	SITUACION	CORTE DE EDAD	SEXO
1	25/02/25	Cuatrovientos	Voluntario	Regular	Adulto	H
2	27/05/25	Compostilla	Voluntario	Regular	Adulto	H
3	06/03/25	Molinaseca	Voluntario	Irregular	Adulto	H
4	07/03/25	Bembibre	Voluntaria	Regular	Adulta	M
5	11/03/25	Dehesas	Voluntaria	Regular	Adulta	M

ALT MAESTRAT (Castelló)

Entrevistas semidirectivas realizadas en la comarca de Alt Maestrat, Baix Maestrat i els Ports

Nº	Fecha	Entidad	Localidad	Perfil profesional	Cohorte Edad	Sexo
1	17/02/2025	Asociación	Albocàsser	Técnico- Treball S	Adulta	M
2	19/02/2025	Administración	Forcall	Técnico- Agent DL	Adulta	M
3	5/03/2025	Administración	Albocàsser	Técnic-Psicòloga	Adulta	M
4	11/03/2025	Asociación	Vall d'Alba	Técnica	Adulta	M
5	12/03/2025	Administración	Albocàsser	Técnica	Adulta	M
6	13/03/25	Institución	Sant Mateu	Docentes	Adulta	M

Grupo de Discusión realizado el 7/06/2024 en la comarca del Alt Maestrat

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Les Coves de Vinromà	Limpieza y cuidados	Jornada parcial Contrato temporal	Adulta	M
2	Les Coves de Vinromà	Limpieza y cuidados	Jornada parcial Contrato temporal	Adulta	M
3	Les Coves de Vinromà	Administración	Jornada parcial Contrato indefinido	Adulta	M

Grupo de Discusión realizado el 13/06/2025 en la comarca del Alt Maestrat

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Albocàsser	Limpieza y cuidados	Jornada completa dia- Sin contrato	Adulta	M
2	Albocàsser	Limpieza y cuidados	Jornada completa dia-Sin contrato	Adulta	M
3	Albocàsser	Limpieza	Jornada parcial -Contrato	Adulta	M
4	Albocàsser	Cuidado mayores	Interna- Sin contrato	Adulta	M
5	Albocàsser	Cuidados mayores	Interna- Sin contrato	Adulta	M
6	Albocàsser	Cuidados	Trabajos por horas	Adulta	M

Carrión de los Condes (Palencia)

Entrevistas semidirectivas a profesionales

N.º	Entidad	Localidad	Perfil profesional	Edad	Sexo
1	Ayuntamiento	Paredes de Nava	Concejala	Adulta	M
2	Iglesia Católica	Paredes de Nava	Párroco	Adulto	H
3	Diputación Provincial	Carrión de los Condes	Trabajadora Social	Adulta	M
4	Colegio Público	Paredes de Nava	Director	Adulto	H
5	Colegio Público	Saldaña	Profesora	Adulta	M
6	Instituto Público	Carrión de los Condes	Orientadora	Adulta	M

Grupo de Discusión

N.º	Localidad	Actividad	Situación	Edad	Sexo
1	Carrión de los Condes	Ganadería	Fijo a T. completo	Adulto	H
2	Carrión de los Condes	Gerocultora	Fijo a T. completo	Adulta	M
3	Carrión de los Condes	Gerocultora	Fijo a T. parcial	Adulta	M
4	Bahillo	Ganadería	Fijo a T. completo	Adulto	H
5	Carrión de los Condes	Ganadería	Fijo a T. completo	Adulto	H

N.º	Localidad	Actividad	Situación	Edad	Sexo
1	Carrión de los Condes	Inactivo	Sin trabajo	Adulto	H
2	Carrión de los Condes	Hostelería	Fijo a T. parcial	Adulta	M
3	Villalcazar de Sirga	Alimentación	Fijo a T. completo	Adulta	M
4	Carrión de los Condes	Hostelería	Eventual a T. parcial	Adulta	M
5	Carrión de los Condes	Hostelería	Fijo a T. completo	Adulta	M
6	Carrión de los Condes	Inactivo	Sin trabajo	Joven	H
7	Carrión de los Condes	Estudiante	Sin trabajo	Joven	M

Carrion y Ucieza (Palencia)

Entrevistas semidirectivas a profesionales

Nº	Fecha	Entidad	Localidad	Perfil profesional	Cohorte Edad	Sexo
1	11/03/2025	Guardia Civil	Monzón de Campos	Sargento	Adulto	H
2	11/03/2025	Guardia Civil	Monzón de Campos	G. Civil	Adulta	M
3	11/03/2025	Cruz Roja	Palencia	T. Social	Adulto	H
4	13/03/2025	CEIP P. Honorato del Val	Monzón de Campos	Jefe de estudios	Adulto	H
5	14/03/2025	Sanidad	Palencia	T. Social	Adulta	M
6	18/03/2025	ONG	Monzón de Campos	T. Social	Adulta	M
7	18/03/2025	ONG	Monzón de Campos	E. Social	Adulta	M
8	25/03/2025	Ayuntamiento	Fuentes de Valdepero	Concejala	Adulta	M
9	25/03/2025	Ayuntamiento	Husillos	Concejala	Adulta	M
10	04/04/2025	Volviendo al Campo	Amayuelas de Abajo	E. Social	Adulta	M

Grupo de Discusión realizado el 08/04/2025

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Santoyo	Voluntario	Regular	Adulto	H
2	Santoyo	Voluntario	Regular	Adulto	H
3	Monzón de Campos	Voluntaria	Regular	Adulta	M
4	Santoyo	Voluntaria	Regular	Adulta	M
5	Piña de Campos	Voluntaria	Regular	Adulta	M
6	Amusco	Voluntaria	Regular	Adulta	M

Grupo de Discusión realizado el 13/05/2025

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Cascón de la Nava	Voluntario	Regular	Adulto	H
2	Monzón de Campos	Voluntaria	Irregular	Adulta	M
3	Monzón de Campos	Voluntaria	Regular	Adulta	M
4	Monzón de Campos	Voluntario	Irregular	Adulta	M
5	Frómista	Voluntaria	Irregular	Adulta	M
6	San Cebrián de Campos	Voluntaria	Irregular	Adulta	M

Grupo de Discusión realizado el 13/05/2025

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Amayuelas de Abajo	Voluntario	Irregular	Adulto	H
2	Amayuelas de Abajo	Voluntario	Irregular	Adulto	H
3	Amayuelas de Abajo	Voluntario	Irregular	Adulto	H
4	Amayuelas de Abajo	Voluntario	Irregular	Adulto	H

La Safor (Valencia)

Nº	Fecha	Entidad	Localidad	Perfil profesional	Cohorte Edad	Sexo
1	18/02/2025	Centro de menores	El Real de Gandia	Educación social	Adulto	H
2	19/02/2025	Universidad de València – Campus de Gandia	Barx	Sociología	Adulto	H
3	25/02/2025	Sindicato CCOO comarcal	Gandia	Sindicalismo	Adulta	M
4	26/02/2025	Centro público de infantil y primaria	Piles	Dirección y docencia	Adulto	H
5	06/03/2025	Asociación pueblo gitano	Rafelcofer	Presidencia	Adulto	H
6	07/03/2025	Instituto público	Villalonga	Dirección y docencia	Adulta	M
7	12/03/2025	Escuela de adultos	La Font d'en Carròs	Docencia	Adulta	M
8	27/03/2025	Centro de Salud	Bellreguard y Villalonga	Trabajo social	Adulta	M

a. Grupo de Discusión realizado el 09/04/2025 en la comarca de la Safor

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte Edad	Sexo
1	Colombia	Cuidados	Sin contrato	Adulta	M
2	El Salvador	Cuidados	Sin contrato	Madura	M
3	Colombia	Cuidados	Sin contrato	Madura	M
4	Colombia	Cuidados	Sin contrato	Adulta	M
5	Ecuador	Cuidados	Sin contrato	Adulta	M
6	Colombia	Cuidados	Sin contrato	Madura	M

b. Grupo de Discusión realizado el 30/04/2025 en la comarca de la Safor

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte	Sexo
1	Oliva	Estudiante	Sin contrato	Adulto	H
2	La Font d'en Carròs	Jubilada	Sin contrato	Madura	M
3	La Font d'en Carròs	Desempleado	Sin contrato	Adulto	H
4	Oliva	Desempleada	Sin contrato	Adulta	M
5	Oliva	Estudiante	Sin contrato	Adulta	M

Entrevistas semi-abiertas realizadas en la comarca de la Safor

Nº	Fecha	Nacionalidad	Localidad	Ocupación	Cohorte	Sexo
1	28/05/2025	Bolivia	Rafelcofer	Limpieza	Madura	M
2	28/05/2025	Rumania	Villalonga	Jubilado	Maduro	H
3	29/05/2025	Sáhara	La Font d'en Carròs	Estudiante	Adulto	H
4	05/06/2025	Marruecos	Almoines	Estudiante	Menor	M
5	09/06/2025	Senegal	Palmera	Limpieza y cuidados	Adulta	M

Verín (Ourense)

Entrevistas realizadas a los profesionales

Nº	Fecha	Entidad	Localidad	Perfil profesional	Cohorte Edad	Sexo
1	14/02/2025	Servicios sociales del ayuntamiento de Verín	Verín	Trabajadora social en el programa denominado: "Plan Gitano"	Adulta	M
2	14/02/2025	Servicios sociales del ayuntamiento de Verín	Verín	Técnica en inclusión social	Adulta	M
3	18/02/2025	CEIP. Princesa de España	Verín	Directora del centro	Adulta	M
4	12/03/2025	Concello de Verín	Verín	Auxiliar Administrativa encargada del padrón de habitantes	Adulta	M
5	14/03/2025	Centro de salud de Verín	Verín	Enfermera atención primaria	Adulta	M
6	31/03/2025	Bufete de abogados	Verín	Abogado de oficio	Adulto	H
7	16/04/2025	Trabajadora social de Cáritas Diocesana	Verín	Trabajadora Social	Joven	M
8	12/06/2025	CEIP. Colegio plurilingüe Amaro Refojo	Verín	Docente de primaria	Joven	M
Trabajadora social del Hospital de Verín rechazó la entrevista						
Policía nacional rechazó la entrevista						

Grupo de Discusión

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte de edad	Sexo
1	Verín	Limpiadora	Irregular	30-40 años	M
2	Verín	Ayuda domicilio	Regular	30-40 años	M
3	Verín	Ayuda domicilio	Regular	40-50 años	M
4	Verín	Ayuda domicilio	Regular	30-40 años	M
5	Verín	Cocinera	Regular	40-50 años	M
6	Verín	Estudiante	Regular	20-30 años	M

Grupo de Discusión

Asistentes	Localidad	Actividad	Situación	Cohorte de edad	Sexo
1	Verín	Cuidadora	Demandante de asilo (Venezuela)	29 años	M
2	Verín	Cuidadora	Regular-Cubana/ Francesa	22 años	M
3	Verín	Estudiante	Española- Marroquí	23 años	M
4	Verín	Ayuda domicilio	Irregular- Colombiana	30 años	M
5	Verín	Estudiante/ camarero	Español-Paraguay	20 años	H

Nº	Fecha	Nacionalidad	Localidad	Ocupación	Cohorte Edad	Sexo
1	05/05/25	Colombia	Verín	Cuidadora	Joven	M
2	14/05/2025	Española	Verín	Ama de casa	Joven	M
3	27/05/2025	Española/ Hondureña	Verín	Auxiliar socio sanitaria	Madura	M
4	28/05/2025	Cubana/ Española	Vilardevós	Camarera	Joven	M
5	05/06/2025	Colombia	Verín	Cuidadora Cocinera	Madura	M
6	10/06/2025	Española	Verín	Técnico de farmacia	Joven	M

Finalmente se han realizado un total 64 entrevistas a técnicos, profesionales, líderes asociativos y personas racializadas. Además, se desarrollaron 13 grupos de discusión, con la participación de unas 65 personas de las seis comarcas.

Las desviaciones principales han sido:

1. Tener que adaptar la muestra de los GD a perfiles concretos que no se habían detectado hasta no empezar las entrevistas a expertos. Una vez se detectaron perfiles que respondían a las variables en consonancia con los objetivos de la investigación se llevó a cabo una adaptación de los GD.
2. Adaptar el número de participantes a los GD por motivos personales, laborales o de otras circunstancias de los participantes.
3. Dificultades con la administración; algunos técnicos se han negado a participar de manera más o menos explícita. Sobre todo, aquellos profesionales de migración y/o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ha detectado un desinterés manifiesto en algunas administraciones por no atender las peticiones de entrevistas.

6. Contenido del estudio

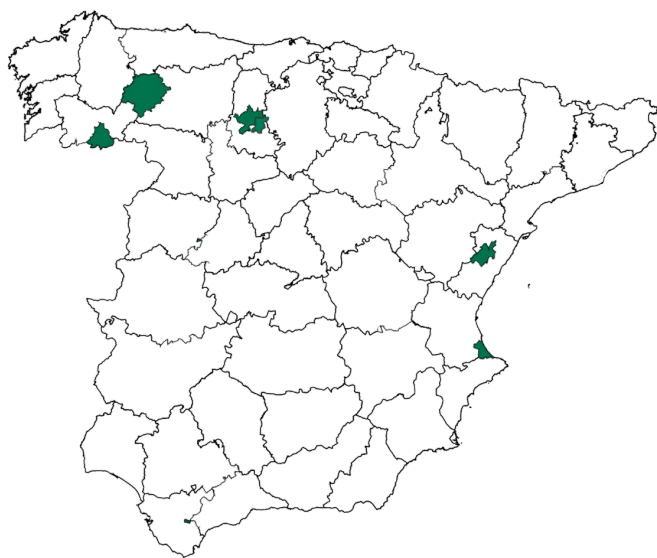
6.1. Aproximación cuantitativa.

La investigación se ha llevado a cabo en seis comarcas del territorio rural del estado español concretamente en El Bierzo en León, Carrión de los Condes y la comarca del bajo Carrión y Ucieza en Palencia, Verín en Ourense, Alt Maestrat en Castellón y La Safor en Valencia con el objetivo de analizar las especificidades de la discriminación y el racismo estructural en el medio rural. El estudio, impulsado por COCEDER, se ha desarrollado con la colaboración de los Centros de Desarrollo Rural asociados Afa Bierzo, Carrión de los Condes, Carrión y Ucieza, Portas Abertas, Alt Maestrat y La Safor.

Aunque los diferentes territorios comparten características típicas del ámbito rural tienen especificidades propias que cabe destacar. Aquellas características compartidas son: baja densidad poblacional, desindustrialización, falta de inversión pública, éxodo rural, migración precaria y presencia del tercer sector.

Todas las comarcas donde se ha llevado a cabo el estudio, exceptuando La Safor (Valencia), son comarcas de interior, con orografías complejas que dificultan su acceso y con infraestructuras deficitarias.

Tabla2. Localización de las comarcas donde se ha llevado a cabo el estudio



Fuente: COCEDER

De características concretas se puede observar:

6.1.1. El Bierzo (León)

El Bierzo es un territorio marcado por la reconversión productiva y por los efectos de la desindustrialización minera e hidroeléctrica. Tras décadas de fuerte dependencia de la minería del carbón, la estructura económica ha quedado fragmentada y orientada hacia servicios de baja productividad y agricultura especializada (vitivinicultura, castaña, hortofrutícola). La pérdida de población joven, la caída del empleo industrial y el envejecimiento han configurado un escenario demográfico regresivo, con balances vegetativos negativos y creciente dependencia de pensiones y transferencias públicas.

6.1.2. Carrión de los Condes y el Bajo Carrión–Ucieza (Palencia)

En esta área del interior palentino, la persistencia del modelo cerealista extensivo y la reducción de explotaciones familiares han generado una base económica estrecha, poco diversificada y fuertemente condicionada por los ciclos agrarios. La regresión demográfica es sostenida desde los años 80, con masculinización en ciertos rangos de edad, baja presencia de población extranjera y dificultades para mantener servicios públicos, comercio local y actividades económicas estables. La falta de oportunidades laborales cualificadas refuerza la marcha de jóvenes hacia ciudades medias y capitales.

6.1.3. Verín (Ourense)

La comarca de Verín combina un entorno rural, pequeñas centralidades urbanas y una economía donde la viticultura, los lácteos y el pequeño comercio siguen teniendo peso, aunque sin capacidad suficiente para retener población joven. Presenta un patrón demográfico envejecido, con alto porcentaje de hogares unipersonales y una lenta recomposición productiva. Su posición transfronteriza con Portugal genera dinámicas logísticas y comerciales particulares, pero no ha revertido la tendencia a la despoblación ni la pérdida de tejido empresarial local.

6.1.4. Alt Maestrat (Castellón)

Alt Maestrat se caracteriza por densidades de población muy bajas, una fuerte especialización ganadera y agroalimentaria residual, y una base económica fragmentada en pequeñas actividades de servicios y micronegocios. La orografía, la dispersión de asentamientos y la distancia a corredores urbanos condicionan la provisión de servicios públicos y la accesibilidad. El envejecimiento, la marcha de jóvenes y la reducción del comercio de proximidad ilustran la debilidad demográfica y la fragilidad del mercado laboral local.

6.1.5. La Safor (València)

La Safor, aunque presenta zonas interiores que mantienen un carácter rural y agrario, se inserta en un entorno territorial con una mayor diversificación económica. La presencia de agricultura intensiva (cítrico), servicios, actividades logísticas y turismo estacional vinculado a Gandía y

la costa generan un tejido productivo más dinámico que el de otras comarcas mencionadas. Su proximidad a áreas urbanas y la movilidad pendular —junto con la mayor presencia de población migrante extranjera— han contribuido a frenar el declive demográfico y a sostener un mercado laboral más abierto y heterogéneo.

Tabla3. Porcentaje de población extranjera por comarcas

El Bierzo	Carrión de los Condes	Carrión y Ucieza	Verín	Alt Maestrat	La Safor
3,87%	4,59%	3,06%	13,20%	9,49%	11,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Las comarcas analizadas muestran trayectorias demográficas y productivas heterogéneas, pero atraviesan procesos comunes vinculados a la pérdida de población joven, la reducción de actividades económicas tradicionales y la dificultad para sostener servicios públicos en territorios de baja densidad. El Bierzo, Verín y el interior de Palencia reflejan los efectos acumulados de la desindustrialización y del ajuste agrario, mientras que Alt Maestrat presenta una ruralidad muy dispersa, altamente envejecida y con un tejido productivo muy fragmentado. Por contraste, La Safor se sitúa en una posición intermedia, con una base económica más dinámica —servicios, cítrico y turismo— y una relación más estrecha con áreas urbanas de mayor jerarquía (Gandía / Valencia), lo que ha amortiguado parcialmente su declive poblacional.

En este contexto, la presencia migrante adquiere una lectura diferenciada según la comarca. Aunque los porcentajes de población extranjera son relativamente bajos en términos absolutos en El Bierzo (3,87%), Carrión y Ucieza (3,06%), Carrión de los Condes (4,59%) o Alt Maestrat (9,49%), su presencia es funcionalmente relevante: sostiene actividades de baja visibilidad económica —agrario, servicios básicos, cuidados— y se concentra en segmentos laborales donde la población nativa ha dejado de estar presente. Verín (13,20%) y La Safor (11,69%) presentan porcentajes más elevados, vinculados a mercados laborales más abiertos y dinámicas de movilidad geográfica transregional.

Es decir, la población extranjera no solo representa un aporte demográfico en territorios envejecidos y con saldo vegetativo negativo; también cumple un rol estructural en la reproducción económica local. Su inserción, sin embargo, tiende a producirse en condiciones de precariedad y segmentación —empleos eventuales, salarios bajos, alquileres informales— que pueden reforzar desigualdades de trato y mecanismos de exclusión. Por ello, aun con cifras moderadas, la población migrante se convierte en un indicador clave para comprender cómo se reorganizan las jerarquías sociales y económicas en los nuevos escenarios rurales.

Las tasas de envejecimiento a nivel provincial muestran el siguiente escenario:

Tabla4. Índice de envejecimiento a nivel provincial

	Total, Nacional	Castellón	León	Ourense	Palencia	Valencia
2024	142.35	135.05	314.80	238.97	243.80	136.67

Fuente: INE

Las provincias investigadas tienen unos índices de envejecimiento superiores al resto del Estado español, exceptuando las provincias de Castelló y València. Esto se debe a que los núcleos poblacionales de Castelló de la Plana y València ciudad desvían los números. Si nos acercamos a las comarcas concretas en estos dos casos podemos observar que la comarca de l’Alt Maestrat (Castellón) tiene un índice de envejecimiento del 286.5% en el 2024 según datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y La Safor de un 139.4% (hay que tener en cuenta que la ciudad de Gandía desvía un poco este índice).

En cuanto al índice de dependencia por provincias se puede observar que:

Tabla5. Tasa de dependencia por provincias

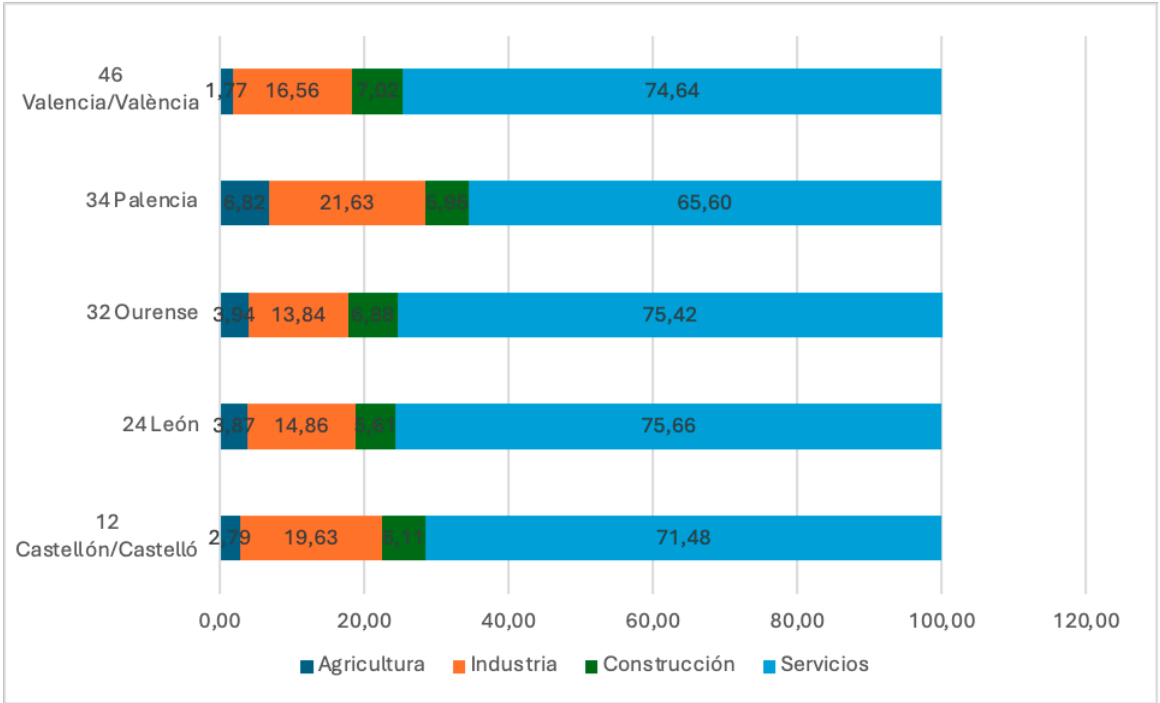
	Total, nacional	Castellón	León	Ourense	Palencia	Valencia
2024	53.29	53.83	65.86	73.32	64.95	52.16

Fuente: INE

Las tasas de dependencia se mantienen dentro de la media, exceptuando la provincia de Ourense, que es más alta. De nuevo Castellón y Valencia presentan algunas tasas más bajas fruto de unas capitales grandes y conectadas, con servicios.

En cuanto al mercado laboral se ve claramente cuál es la composición de este si hace una fotografía de los ocupados por sectores. En este sentido, siguiendo la tabla 6, se extrae que el sector servicios es el predominante en todas las provincias donde se sitúan las comarcas estudiadas.

Tabla6. Porcentaje de ocupados por sectores a nivel provincial

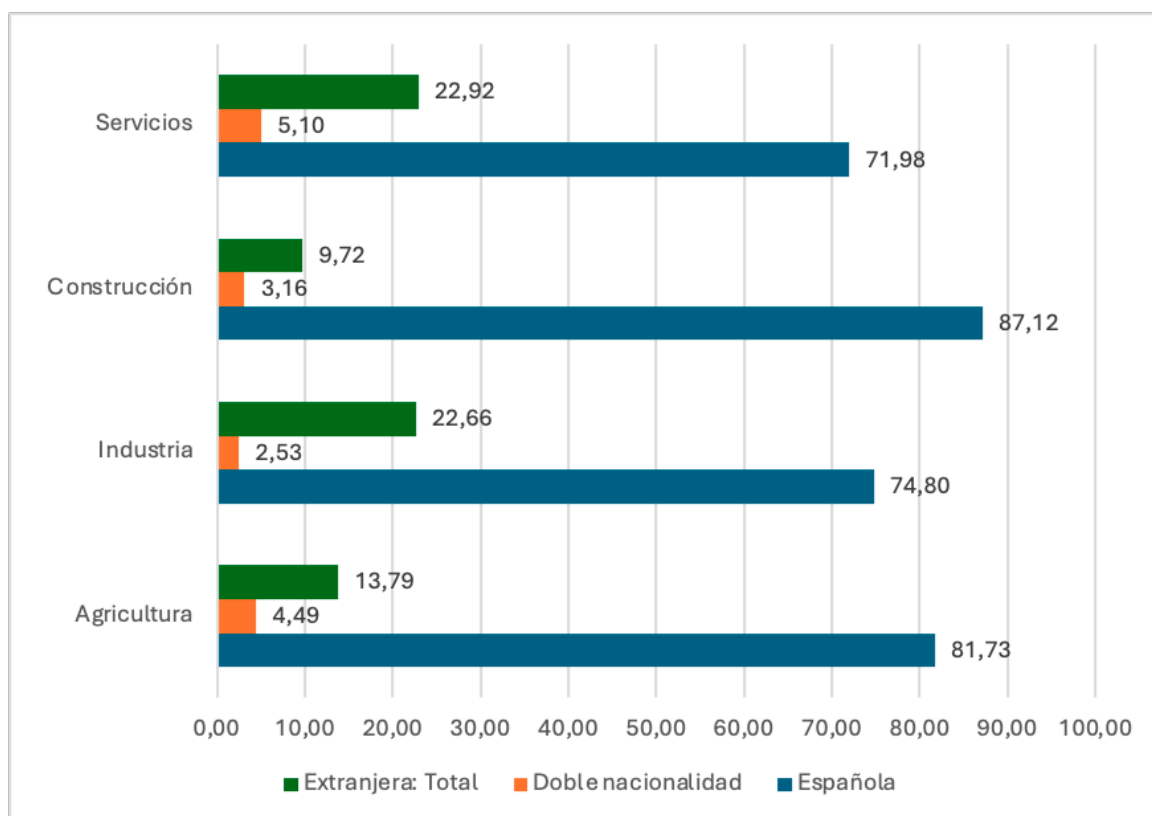


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Esta da una muestra de que existe un mercado laboral principalmente de servicios, donde la industria tiene un papel relativo y la agricultura y la construcción un peso bastante menor en comparación. Esto es transversal a todo el territorio español.

Si se mira quien compone ese mercado de trabajo se pueden extraer algunas cuestiones como las siguientes:

Tabla7. Ocupados en España por nacionalidad (española/doble/extranjera). Sectores (2024)



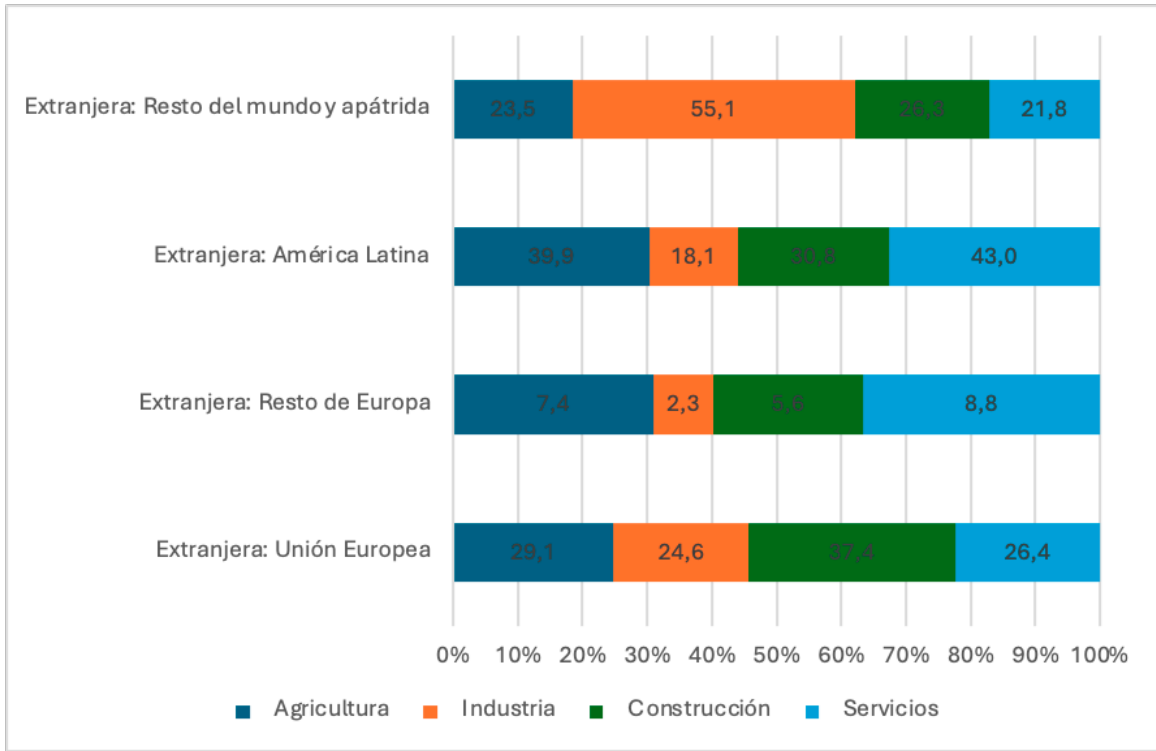
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Cabe tener en cuenta que, según datos del INE a 2024, la población extranjera en España representa el 13.4% y los datos de ocupados por nacionalidad dejan entrever que están sobre representados en determinados sectores, como es en el sector servicios y en la industria, donde son más del 20% de los contratados. Esto muestra que los extranjeros en España son, principalmente, una fuerza laboral. Esto indica que las personas migrantes se concentran especialmente en este sector, generalmente en trabajos de baja cualificación, más precarios y con alta rotación.

Este patrón refleja una segmentación del mercado laboral, donde los extranjeros ocupan mayoritariamente los empleos menos atractivos para la población autóctona. También muestra que la economía española depende estructuralmente de la mano de obra migrante para mantener el sector servicios.

Si se mira cómo están distribuidos los extranjeros ocupados por sectores laborales en la siguiente gráfica:

Tabla8. % de extranjeros ocupados por sectores sobre el total de extranjeros (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

La tabla 8 muestra que si se mira cada sector como está distribuido vemos que sobre el total de extranjeros ocupados en cada uno de los sectores nos queda un mapa bastante claro. En el sector de la industria predominan los agrupados como “restos del mundo y apátridas” siendo un 55,1% sobre el total de extranjeros ocupados. Se entiende que es mano de obra de África y Asia. En la agricultura predominan las personas provenientes de América Latina, con un 39,9%, como también lo hacen en el sector servicios con un 43,0%.

La distribución de personas extranjeras por sectores económicos revela una clara segmentación étnica del mercado laboral. Los latinoamericanos se concentran en servicios y agricultura, sectores feminizados, con bajos salarios y alta rotación; las personas procedentes del “resto del mundo” predominan en la industria, ocupando trabajos duros y poco cualificados; mientras que trabajadores de la UE tienen mayor presencia en construcción y agricultura, combinando empleos estacionales y oficios especializados. Esta desigual distribución no es casual, sino el resultado de procesos estructurales —demanda de mano de obra flexible, reconocimiento desigual de cualificaciones y redes migratorias— que asignan a cada grupo un nicho laboral específico, reproduciendo desigualdades sociales y oportunidades limitadas de movilidad.

6.2. Análisis cualitativo. Dinámicas y consecuencias del racismo estructural en el ámbito rural

La realidad social es bastante compleja en tanto que conjunto de interacciones, estructuras, valores, tradiciones, actores sociales, etc. Por lo que enfrentarse al análisis de las consecuencias del racismo estructural y sus consecuencias es una tarea que requiere de una buena estructuración y un acercamiento certero a los diferentes fenómenos sociales.

En el presente informe se ha optado por dividir la estructura social investigada en diferentes campos, para poder optimizar mejor la información recogida. Partiendo de las ideas de Bourdieu donde la sociedad estaría dividida en diferentes campos sociales donde cada campo es un ámbito interrelacionado pero autónomo de los demás, con normas propias y dinámicas concretas. Cada espacio de la vida social estaría agrupado en estos campos y dentro de ellos existe una cierta lucha por conseguir las mejores posiciones, por tener una posición privilegiada dentro de ellos.

Esta idea es bastante operativa a la hora de analizar el racismo estructural, ya que se puede observar cómo atraviesa los diferentes espacios de la vida social y analizarlos uno por uno.

A lo largo del análisis, pues, se han estudiado por separado diferentes campos y cuál es la expresión del racismo en cada uno de ellos, es esta línea se han establecido los campos económico, cultural, social y político como ejes vertebradores de este.

Se han encontrado algunas pautas que se repiten a lo largo de las zonas investigadas y que dejan entrever que sí que existe un racismo estructural al darse de forma generalizada, con los mismos patrones, en diferentes campos y en comarcas diversas del territorio investigado como se verá a lo largo del análisis.

6.2.1. Campo económico (laboral, recursos, vivienda, herencias)

El campo económico es aquel que engloba todos aquellos aspectos relacionados con la estructura productiva y laboral, así como los recursos disponibles y la capacidad de poder acumularlos; vivienda, herencias o rentas.

Este apartado destaca como uno de los más importantes a la hora de acercarse a la realidad de las personas racializadas, ya que la mayor parte de esta son migrantes y su puerta de entrada (o su motivación principal) es el trabajo.

Analizar por separado el campo económico permite establecer cuáles son los recursos de carácter socioeconómico que las personas racializadas pueden acumular (o no) o de cuáles realmente disponen para poder llevar adelante su proyecto vital. El trabajo y la calidad de este, el tipo de contrato o el sector en el que está enmarcado da pistas sobre la situación socio-económica de

estas. Aun así, dentro del campo económico no solo destaca el trabajo si no todos los elementos materiales que permiten la reproducción de la vida.

Primeramente, se abordará la cuestión del trabajo, del empleo, ya que tal y como se ha detectado en todos los territorios el trabajo es clave y aparece un elemento, incluso, de *etnificación* del trabajo.

La mayor parte de las entrevistas y los grupos de discusión destacan que los empleos más temporales, más precarios y peor remunerados son llevados a cabo casi exclusivamente por personas de origen extranjero.

6.2.2. Los sectores laborales y sus condiciones

Los sectores laborales que se tienden a ocupar claramente giran en torno a dos variables clave: la nacionalidad y el género. En las diferentes entrevistas con los técnicos y las voces expertas se ha detectado que la probabilidad de llegar nuevo a un territorio y acabar en determinados sectores económicos es muy alta.

Las personas migrantes en el ámbito rural, tal y como ya se ha señalado, tienen como motivación principal la mejora de sus condiciones vitales pero la alta vulnerabilidad con la que empiezan su proceso de asentamiento (fruto de procesos migratorios que los ha dejado empobrecidos) les acaba obligando a dedicarse a sectores laborales/productivos que suelen ser poco atractivos para los autóctonos. La situación del sector primario, uno de los grandes perdedores de la globalización, así como la baja rentabilidad de sectores como la hostelería o muy precarizados y poco reconocidos como los cuidados hace que sean los primeros trabajos que suelen rechazar las personas autóctonas.

“ Yo siempre digo que el trabajo al que se dedica la población migrante cuando llega es la explotación del siglo XXI. Es decir, no tiene ningún tipo de condiciones laborales, el trabajo está muy mal remunerado. no llega al salario mínimo interprofesional ni de casualidad, te quiero decir. Y condiciones es que no tienen ninguna. Te quiero decir que ellas no tienen vacaciones, ellas no tienen un horario, ellas no tienen un descanso, es que no tienen nada.” (Entrevista semidirectiva nº1, técnica extranjería, Alt Maestrat)

Las personas racializadas que habitan los municipios rurales, generalmente procedentes del sur global o de Europa del este, se ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo como única vía para acceder a cualquier recurso. Esta situación, de precariedad ligada a su condición previa junto a los sectores productivos realmente existentes en el ámbito rural ha acabado por especializar la población migrante en determinados espacios laborales.

A lo largo del trabajo de campo se ha podido ver como los trabajos que ocupan principalmente las personas migrantes tienen que ver con la hostelería, la limpieza, los cuidados, la obra y la agricultura.

En términos generales, en las comarcas estudiadas, parece ser que los sectores que tienen mayor asentamiento son justamente estos, ya que la industria no es especialmente relevante. Aquello que cambia suelen ser la posición dentro de la estructura productiva entre locales y migrantes, generalmente nos encontramos en las comarcas estudiadas con una clara posición de dueños de las empresas por parte de las personas autóctonas y de trabajadores por parte de las personas extranjeras.

En este sentido, el mercado laboral en las zonas rurales y semirurales españolas presenta una clara segmentación ocupacional, donde la población migrante y gitana se inserta mayoritariamente en los sectores más precarizados, informales y con menor reconocimiento social. Esta distribución no es aleatoria, sino el resultado de una articulación estructural entre desigualdad de clase, origen, género y estatus legal, que asigna a determinados grupos poblacionales funciones económicas específicas dentro del modelo productivo local.

Los testimonios recogidos de profesionales y técnicos apuntan a una división laboral que reproduce las jerarquías de género y etnia: mientras las mujeres se concentran en cuidados, limpieza o servicios domésticos, los hombres se integran en sectores de la producción física intensiva (construcción, agricultura, forestal o ganadería). Esta dualidad sostiene el funcionamiento económico local a costa de la precariedad y la invisibilidad de los trabajadores racializados.

El sector más destacado para la inserción laboral de las mujeres migrantes es el de los cuidados y el trabajo doméstico, incluyendo limpieza, atención a personas mayores y empleo en residencias.

Algunas de las causas detectadas en la feminización de ciertos empleos son:

- Demanda creciente de cuidados en un contexto de envejecimiento poblacional y falta de servicios públicos suficientes en zonas rurales.
- Feminización de la migración: muchas mujeres llegan solas o como cabezas de familia, lo que las impulsa a buscar empleos compatibles con las redes domésticas y comunitarias existentes.
- Facilidad de acceso: estos sectores permiten la contratación informal, lo que resulta crucial para quienes carecen de documentación regular.
- Redes informales de inserción: la contratación se realiza mayoritariamente a través de recomendaciones de familiares, amistades o conocidas que ya trabajan en el sector.

A pesar de ofrecer una vía rápida de acceso al empleo, estas ocupaciones están marcadas por la precariedad estructural, con bajos salarios, jornadas extensas, falta de derechos laborales y riesgo de abuso. En el caso de las trabajadoras internas, la frontera entre el espacio laboral y el doméstico desaparece, generando situaciones de dependencia económica y emocional.

Las mujeres latinoamericanas suelen mostrar trayectorias de ascenso dentro del sector —gracias a su dominio del idioma y su adaptación cultural—, logrando estabilizarse con el tiempo. Por el contrario, las mujeres magrebíes o subsaharianas enfrentan mayores barreras debido a los prejuicios culturales, las dificultades idiomáticas y el racismo implícito en los procesos de contratación.

En cuanto a los sectores masculinizados, los hombres migrantes se insertan predominantemente en los sectores forestal, agrícola, de la construcción y la hostelería, todos caracterizados por alta temporalidad, condiciones duras y escasa protección social.

Generalmente, estos sectores demandan mano de obra intensiva y flexible, lo que se ajusta al perfil de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones precarias debido a su situación administrativa.

- Existe una discriminación indirecta: a los hombres migrantes se les asignan tareas físicas y poco cualificadas, asumiendo una “disponibilidad total” y una “resistencia” asociadas a estereotipos raciales.
- La irregularidad documental actúa como herramienta de control laboral, pues impide negociar mejores condiciones o denunciar abusos.
- En el contexto rural, donde escasea la inspección laboral, los empleos en el sector agrícola y forestal funcionan muchas veces bajo lógicas de semiesclavitud moderna, con sueldos muy bajos y condiciones de vida duras.

“En cuanto te cogen y no te pagan lo que te corresponde, o cuando trabajas y luego no te pagan, eso son malos tratos. Lo último en una empresa de aquí. Valía para comodín, les servía para todo porque por necesidad he aprendido más oficios. Y me decían “cuando tengas los papeles te hago socio”, y cuando los tuve, nada.” (Entrevista semiabierta N°2, extranjero de Rumanía, La Safor)

En cuanto a la población gitana, aunque nacional y con ciudadanía plena, comparte con la población migrante una posición estructural de vulnerabilidad. La diferencia radica en que el autoempleo informal (venta ambulante, chatarra, ferias, pequeños comercios familiares) constituye una de las pocas vías de subsistencia disponibles, debido a los prejuicios raciales que bloquean su contratación en el mercado formal. De hecho, es una de las comunidades que de forma transversal son más discriminadas

“se recogen comentarios que describen a la población gitana como problemática, poco colaboradora o conflictiva” (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza)

La economía de la comunidad gitana se articula en torno a redes familiares y comunitarias, lo que genera cierto grado de autonomía, pero también de encierro socioeconómico, ya que las oportunidades laborales no trascienden el ámbito endógeno. Además, los roles de género

tradicionales limitan la participación de las mujeres gitanas en el trabajo asalariado, relegándolas al cuidado del hogar y la reproducción familiar, funciones fundamentales, pero no remuneradas.

Si nos fijamos en el análisis de los grupos de discusión, se observa que las personas participantes, a pesar de sus diferencias culturales y de procedencia, comparten de forma transversal una posición dentro de la misma clase social caracterizada por la precariedad laboral.

Las trabajadoras migrantes del sector de cuidados presentan una situación especialmente delicada: tienden a ser mujeres en situación irregular y aunque algunas no lo están, la tendencia es esa. Esta falta de regularización, unida al desinterés de algunas familias contratantes y al desconocimiento sobre cómo acceder a sus derechos, las coloca en una posición de dependencia extrema, donde su estabilidad laboral y residencial está condicionada por la voluntad de sus empleadores. A parte, la racialización se hace manifiesta a la hora de la contratación.

“fue por allí buscando una empleada de hogar, que fuera a su casa a limpiar y todo eso, y les dijo que si era negra no fuera muy oscura, si era ‘mora’ que no llevase pañuelo, como diciendo que si ‘es’ que no se le note mucho...” (Entrevista técnica, El Bierzo)

“Yo entré como ciego, porque no hablé absolutamente nada con la señora, entré y ya está” (GD 2, Verín),

Esta dependencia no solo se manifiesta en la esfera laboral, sino también en la habitacional: muchas residen en las viviendas de quienes las emplean, lo que genera un sentimiento constante de deuda y limita su capacidad de reclamar mejoras en salario, jornada o condiciones de descanso.

A pesar de la reciente regulación estatal del sector de los cuidados, la economía sumergida sigue predominando, y los contratos que se formalizan con regularidad suelen reflejar jornadas inferiores a las trabajadas u obligan a las trabajadoras a costear su propia seguridad social.

En el caso de la población gitana, los relatos muestran cómo la trayectoria laboral desde edades tempranas se vincula a trabajos estacionales en el campo, normalmente sin contrato, lo que garantiza empleo temporal pero precario. La experiencia laboral previa y la cultura del trabajo en estas comunidades permite cierta continuidad, aunque siempre en condiciones de informalidad.

El patrón laboral se reproduce en sectores específicos: las mujeres migrantes se concentran en los cuidados de personas mayores, la hostelería y la limpieza, mientras que los hombres suelen incorporarse al sector agrícola, la producción cárnica, la construcción o la hostelería temporal.

En todos estos casos, las condiciones de trabajo se caracterizan por la ausencia de contrato, bajos salarios, jornadas extensas y explotación abierta, situaciones que en algunos casos se normalizan.

“principalmente trabajos de corta duración y escaso nivel económico en los hombres y la parte de ayuda a domicilio, hostelería y agricultura para las mujeres.” (Entrevista técnica, El Bierzo)

“De trabajar hemos trabajado mucho, pero siempre sin contrato... en la vida laboral me salen cinco años”. (GD, 1, La Safor).

Las mujeres con formación académica previa se ven obligadas a aceptar empleos muy por debajo de su cualificación, lo que implica un profundo impacto emocional y social.

“pero después a veces son personas con titulación, media o superior, pero salen de su país sin ningún tipo de documentación, que aquí se les pide para poder homologar esos títulos” (Entrevista técnica, El Bierzo)

El acceso a estas oportunidades laborales se facilita a través de redes informales de apoyo entre mujeres migrantes, que comparten información sobre vacantes y condiciones de empleo. Este conocimiento colectivo permite identificar trabajos y empleadores especialmente precarios, generando una herramienta de protección mutua, aunque también evidencia la existencia de estructuras laborales que dependen de la explotación. La vulnerabilidad se amplifica por la falta de control sobre derechos laborales, lo que favorece dinámicas de maltrato y abuso:

“Mi jefe me gritaba todo el tiempo, me hablaba mal delante de los clientes y me hacía sentir que no valía nada. Yo aguantaba porque necesitaba el trabajo, pero me iba a casa llorando” (GD, ALT MAESTRAT).

6.2.3. Entre el estigma y el utilitarismo

A lo largo de las entrevistas realizadas se ha detectado un doble discurso que se vierte encima de las personas racializadas. Por un lado, se les proyecta toda una idea estigmatizadora de ser poco trabajadores o que las motivaciones principales de su relación con la administración pública es la de evitar el trabajo asalariado buscando alternativas en base a ayudas.

Trata de identificar o equiparar racializado (especialmente en el caso de la comunidad gitana) con “vago”. De hecho, es en este punto, donde se pueden detectar actitudes de racismo entre diferentes comunidades racializadas o extranjeras, en diferentes grupos de discusión, aparecen discursos de personas extranjeras que estigmatizan como vagos o mal trabajadores a otras comunidades extranjeras o a la comunidad gitana. Esta idea refleja una suerte de lucha del “penúltimo contra el último” siendo un elemento de disputa entre comunidades que ante un cierto capital simbólico en disputa (tener el estatus de buen ciudadano reconocido por los autóctonos) acaban enfrentándose entre sí a nivel discursivo.

De hecho, la comunidad gitana es la que peor parada aparece, siendo siempre el chivo expiatorio, principalmente por este tema. La comunidad gitana es leída de forma transversal siempre (desde técnicos a comunidades racializadas) como una comunidad que trata de huir del trabajo

asalariado de todas las formas posibles, incluyendo transgresiones de la legalidad. En este sentido, se ve como por parte de las personas extranjeras atacar a la comunidad gitana es una forma de intentar integrarse en las dinámicas racistas del territorio y desviar la atención sobre su propia condición de alteridad.

A pesar de esta visión estereotipada existe todo un discurso que, tratando de fomentar la convivencia intercultural, acaba por reproducir también esquemas de estigmatización, pero en este caso en clave utilitarista, sobre todo con las personas de origen extranjero. Se señala a lo largo del trabajo de campo la importancia de aceptar la migración como un instrumento valioso para el desarrollo económico y se pone en valor el hecho de que vengan a trabajar ya que los autóctonos no quieren ocupar ciertas ocupaciones ya bien sea por su dureza, por su baja rentabilidad y por las condiciones legales.

Los migrantes, por tanto, son leídos como fuerza productiva principalmente no como ciudadanos de pleno derecho. Es decir, en tanto que son productivos son valiosos.

Esta visión utilitarista de los migrantes tiene consecuencias sociológicas claras, por un lado crea que una falsa dicotomía entre racializados buenos (“vienen a trabajar”, “se adaptan”) y racializados malos (“buscan ayudas”, “dan problemas”, “tienen muchos hijos”) deshumanizando a las personas migrantes y objetivándolas como elementos productivos, pero por otro lado acaba haciendo que las personas racializadas también se den valor a sí mismas en tanto que elementos productivos buscando integrarse a partir de ser valiosos en la sociedad y no en tanto que personas.

Existe, a partir de esta visión, una cierta subordinación de derechos auto percibida en muchos casos. Se reconoce que los autóctonos han de disponer de prioridad y más derechos y la convivencia ha de ser siempre unidireccional; de los extranjeros hacia los autóctonos.

6.2.4. Vivienda

El acceso a la vivienda es un punto clave que conviene destacar. No solo está siendo, según datos del CIS, una de las principales problemáticas detectadas por los ciudadanos, es una cuestión que a nivel cualitativo se palpa en los municipios rurales donde COCEDER interviene.

La vivienda es, hoy en día, un elemento de estratificación social clave; quien tiene en propiedad una o más viviendas tiene mucha mejor posición social de partida que aquellos que no. Justamente, lo que se ha venido detectando a través del trabajo de campo es cómo tener la disponibilidad de heredar una vivienda puede marcar la diferencia entre residir en un municipio rural o tener que irte a la ciudad.

Aparte, se ha venido observando cómo la capacidad de poder alquilar una propiedad a un tercero permite extraer rentas a las capas más vulnerables de la sociedad. Dicho de otro modo, se ha detectado que es un elemento de redistribución de la riqueza hacia arriba; aquellos más vulnerables se ven obligados a trabajar, en condiciones que ya se han comentado arriba, para

poder pagar un alquiler a personas que han heredado una propiedad. Un fenómeno que algunos autores han denominado “acumulación por desposesión” y que acaba concentrando riqueza y rentas en aquellos que ya tenían una posición ventajosa de partida.

En contextos rurales esto se acrecienta mucho más: la tradicional estructura de la propiedad, que ha tendido a concentrarse en cada vez menos manos, junto a la problemática del despo-
blamiento y la falta de vivienda disponible para el alquiler, se suma a la carga discriminatoria que sufren las personas racializadas.

Tanto para las personas trabajadoras migrantes como para la población gitana, el acceso a la vivienda se ve condicionado por la clase social y la racialización, encontrando obstáculos adicionales por prejuicios de propietarios y cláusulas contractuales diseñadas para trabajadores con empleo estable. Una participante comenta: *“Es verte el apellido y ya se echan para atrás... los pisos que hemos conseguido casi siempre han sido a través del contacto directo con particulares concretos que sí se han mostrado más predispuestos”*. (GD, Carrión de los Condes)

El acceso a la vivienda se ve igualmente condicionado por la precariedad económica y legal. Las personas migrantes enfrentan discriminación abierta y dificultades para empadronarse o formalizar alquileres, lo que refuerza la dependencia de la vivienda informal y de las redes de apoyo. Las condiciones de las viviendas disponibles suelen ser antiguas, deterioradas o compartidas por varias familias, generando limitaciones *para la integración social y la vida comunitaria*:

“Si no fueran por los migrantes los pisos, muchos no se estarían alquilando... porque no están en las mejores condiciones”. (GD, Carrión y Ucieza).

“Es muy difícil alquilar si eres gitano. Te ven y se echan para atrás. A no ser que sea a otros gitanos, a mí se me ha hecho muy difícil”. (GD, La Safor)

La combinación de discriminación, falta de acceso a la economía formal y escaso capital económico produce un círculo de vulnerabilidad que atraviesa todas las dimensiones de la vida: laboral, habitacional y social.

En última instancia, la vivienda actúa como un eje articulador de desigualdades: determina quién puede permanecer en el territorio y en qué condiciones, reproduce jerarquías sociales y limita la posibilidad de arraigo e integración. Lejos de ser un simple bien material, se convierte en el principal filtro que define la pertenencia y la exclusión en el mundo rural contemporáneo.

6.3. Campo cultural (formación, ámbito académico)

En cuanto al campo cultural, este se desarrolla como un espacio marcado por las trayectorias migratorias y la vulnerabilidad socioeconómica de la población que llega. El proceso de migración determina un antes y un después en la vida de las personas, condicionando su acceso a la

educación formal y, en consecuencia, a la participación en la vida cultural de las comunidades receptoras. Como señala uno de los profesionales entrevistados,

“Normalmente las personas que en sus países son de zona rural tienen menos estudios que las personas que vienen de ciudades y también hay mucha diferencia a los municipios a los que vienen de la provincia de Castellón. ¿Sabes? También hay mucha diferencia. Entonces, la mayoría de las personas que vienen aquí, lo único que pueden homologar es el bachillerato.” (E2, Técnica migración, Alt Maestrat)

La educación y la homologación de títulos constituyen un elemento central del campo cultural. Muchos migrantes con estudios superiores en sus países de origen no pueden acreditar su formación en España, lo que limita su acceso a empleos y oportunidades formativas acordes con su preparación. Esto genera un desacople del capital cultural y profesional con el que podrían aportar a la comunidad, obligando a muchos a aceptar trabajos por debajo de su cualificación. Un testimonio resume esta situación:

“Apenas llegando homologué el título de Bachiller, yo soy ingeniero de producción animal, ese no lo pude porque me faltaron unas cosas. Entonces hice cursos, todo tipo de cursos que te ponen... que te llevan... que no sé qué más... realmente no sirvió de nada.” (GD, AFA BIERZO)

La consecuencia es una reducción de la diversidad cultural disponible y una pérdida de oportunidades de enriquecimiento mutuo entre migrantes y población local.

La barrera idiomática representa otro factor crítico en el campo cultural. En algunos de los municipios investigados predomina el valenciano, y la falta de dominio de esta lengua puede limitar el acceso a información o empleo. Generalmente es un problema que se detecta sobre todo entre las comunidades latinoamericanas, siendo otras comunidades mucho más flexibles a la hora de aprender el idioma vehicular de la zona.

El castellano, por otro lado, también puede suponer una barrera para aquellos que provienen de países del sur global, principalmente África o el Sureste asiático. Donde esto puede suponer una barrera se impulsan clases de alfabetización y aprendizaje de lenguas y se organizan según las necesidades de los grupos:

“Aquí de personas mayores si hacemos alfabetización con mujeres y hombres, sobre todo árabes. Y luego también con población latinoamericana, valenciano. Aquí están las dos, castellano y valenciano. Y bien, te quiero decir, la gente viene y súper bien.” (Entrevista técnica, Alt Maestrat)

La adaptación lingüística se ve facilitada para quienes provienen de países con lenguas románicas, mientras que otros grupos requieren más apoyo, evidenciando desigualdad en el acceso a recursos culturales y educativos.

El análisis de los testimonios revela también estereotipos culturales ligados al origen:

“Algunas personas de determinados países tienen facilidad para el lenguaje”, (Entrevista técnica, Carrión de los Condes)

lo que refleja percepciones subjetivas sobre capacidades o predisposición para aprender y que pueden derivar en actitudes de rechazo hacia ciertas culturas, influyendo en la integración cultural y social de los migrantes. La falta de mediación intercultural y de formación del personal que trabaja con migrantes refuerza estas desigualdades, perpetuando prejuicios y limitando la interacción social.

En el ámbito educativo, los menores migrantes se integran formalmente en las escuelas, pero enfrentan múltiples dificultades derivadas del momento de llegada, la adecuación del currículum y la barrera lingüística. La implicación familiar actúa como factor mediador, sin embargo, el acompañamiento de las familias no siempre es posible debido a horarios laborales extensos o desconocimiento de la lengua, lo que afecta al acceso a recursos culturales y educativos.

En la educación secundaria y el acceso a la universidad, estas limitaciones estructurales se intensifican, especialmente en áreas rurales, donde la falta de transporte y recursos condiciona la continuidad académica y, por extensión, la participación cultural futura.

La formación para adultos también refleja desigualdad en el acceso al campo cultural. La inscripción en programas de capacitación profesional requiere documentación que no todos los migrantes poseen o títulos de estudios básicos

“Todas las formaciones que nosotros ofrecemos... ellos pueden acceder. Después tenemos un programa que es un taller de ocupación, y eso sí que es una formación mixta de trabajo y ocupación, y necesitas una inscripción a LABORA (sistema valenciano de ocupación).” (Entrevista técnica, Alt Maestrat)

Además, la falta de conocimiento sobre las instituciones públicas limita el acceso a la formación y a oportunidades de participación cultural:

“Ellos no saben ni lo que es LABORA, ni qué es el SEPE ni qué hacen aquí, ni qué hacen los CEDES, y ahí, en la primera, entrar a servicios sociales, también se hace educación en este sentido.” (Entrevista técnica, Alt Maestrat)

Más allá de la educación formal, la imposibilidad de ejercer profesiones correspondientes a su formación reduce la riqueza cultural y laboral aportada por los migrantes,

“Yo siendo ingeniero tuve que aprender ahorita tengo ya más de 6,7 oficios que antes no los conocía” (GD, Carrión de los Condes)

La jornada laboral extensa y la precariedad provocan aislamiento social, limitando la interacción intercultural y el intercambio de saberes y prácticas culturales, reduciendo así el capital cultural colectivo.

Las diferencias de género en la migración también afectan al campo cultural. La migración masculina predomina en países como Marruecos, Argelia o Pakistán, mientras que en países latinoamericanos suele ser femenina. Esto condiciona el acceso a ciertos tipos de empleo y a espacios culturales, generando una feminización o masculinización de determinadas experiencias laborales y sociales. La segregación de género se refleja en los tipos de trabajo que asumen, reproduciendo dinámicas culturales y económicas diferenciadas.

El racismo y los prejuicios culturales emergen como factores estructurales que afectan al campo cultural. La exclusión y las barreras lingüísticas generan estigmatización y limitan la participación en la vida comunitaria.

“El racismo depende de la gente... Si la persona tiene un conocimiento muy ancho del mundo, no va a ser racismo... lo que sí importa es el corazón, tenemos que cambiar el corazón, la mentalidad.” (GD, Verín)

La falta de formación de profesionales que trabajan con migrantes perpetúa estos prejuicios, reproduciendo desigualdades en la educación y en la atención social.

En los centros educativos, estas dinámicas se manifiestan en reproducción de estereotipos y segregación silenciosa. Se observa como en un colegio donde se ha hecho trabajo de campo y que tiene alta concentración de alumnado gitano y migrante que “Al final, se lo das al que lo va a aprovechar” (Entrevista, Verín), reflejando cómo la sobrecarga docente refuerza la desigualdad.

Las jerarquías étnicas percibidas entre el alumnado reproducen patrones de exclusión y tensión cultural. Incluso minorías previamente discriminadas, como los gitanos, pueden reproducir actitudes excluyentes hacia migrantes recién llegados para mejorar su estatus dentro de la comunidad. También pasa a la inversa, muchos migrantes tratan de diferenciarse de la comunidad gitana aprovechando los estereotipos.

Pese a estas limitaciones, las actividades promovidas por los CDR y ONG generan espacios de convivencia intercultural, donde se valoran las prácticas culturales propias y del lugar de acogida.

“Como soy una buena africana, cuando escucho música me acerco... siempre me han acogido muy amables... cuando hacen fiestas estoy muy contenta, aunque sea diferente que, en Senegal, aquí hay cohetes y allí música.” (Entrevista, La Safor)

Las familias migrantes perciben la educación como una vía de movilidad y de integración cultural, especialmente en el caso de las niñas marroquíes, quienes destacan por su esfuerzo académico y alta motivación.

“Mi percepción es que aquí en España son bastante comprensivos y aceptan más a los inmigrantes, hay algunos que no, pero en comparación a Francia, aquí no hablan tan mal de nosotros.” (GD, La Safor)

Finalmente, la educación se revela como un espacio ambivalente. Facilita la integración y la convivencia en edades tempranas, pero también reproduce dinámicas de desigualdad, estereotipos y segregación a medida que se consolidan identidades culturales. La diversidad cultural en las aulas es fundamental para el sostenimiento del sistema educativo rural, convirtiendo a la población migrante en un componente central de la vida educativa y cultural del futuro. La ausencia de planes de acogida escolar, mediación intercultural y formación para docentes limita la inclusión plena y mantiene las barreras estructurales que condicionan el desarrollo del campo cultural en estas cinco comarcas.

“Aunque busquen favorecer a la población migrante, al no tener un análisis o un punto de vista crítico sobre el racismo, los modelos de intervención acaban desviándose hacia posturas que suelen secundar el racismo social y estructural imperante, como si todo funcionara así y no pudiera funcionar de otra manera.” (GD, La Safor)

“...ver como todas mis compañeras se colocaban y a mí me rechazaban por ser negra, me generó una impotencia...y dije de verdad que ahora sí que siento que soy de fuera y tengo que trabajar de lo que sea, olvídate de tu carrera, ... “ai! es que es negra, no te podemos coger” ...” (GD, El Bierzo)

6.4. Campo social y campo simbólico

El campo social y comunitario constituye un eje esencial para comprender los procesos de inclusión, pertenencia y arraigo en las seis comarcas rurales analizadas. A partir de los testimonios recogidos, se observa un territorio donde las dinámicas comunitarias desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana, pero también un espacio donde se expresan las tensiones entre la solidaridad y la exclusión, entre la convivencia aparente y la desigualdad estructural.

El análisis de los discursos revela una dualidad constante. Por un lado, las técnicas y profesionales de los centros de desarrollo rural destacan el potencial integrador de la comunidad local, especialmente en los municipios pequeños, donde las actividades interculturales promovidas por ONGs o asociaciones de mujeres han sido una herramienta eficaz para generar vínculos.

Por otro se reconocen los límites de esa integración: “la participación de personas migrantes sigue siendo desigual y frágil” (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza).

Esta coexistencia de inclusión simbólica y exclusión práctica da forma a un campo social marcado por jerarquías invisibles y capitales desiguales.

En la superficie, el discurso de la buena convivencia predomina. En muchos pueblos se percibe una normalización de la diversidad, una aceptación cordial de la presencia migrante o gitana, y

una relativa estabilidad en las relaciones cotidianas. Sin embargo, bajo ese aparente equilibrio subyace una convivencia formal, institucionalizada, que no siempre se traduce en vínculos reales ni en reciprocidad social.

Algunos actores municipales, como concejalas o trabajadoras sociales, desempeñan el papel de “puentes comunitarios”, mediando entre población autóctona y migrante. Una técnica lo resume así:

“A veces somos nosotras las que tenemos que acompañar a las madres marroquíes o latinoamericanas a hablar con la escuela o con el ayuntamiento, porque no saben cómo hacerlo o porque directamente no las escuchan”. (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza).

Estas mediaciones, aunque necesarias, reproducen a menudo una lógica paternalista y jerárquica, donde la integración se concibe como un proceso que las instituciones otorgan desde arriba y no como una construcción colectiva horizontal.

Las expresiones del tipo “hay que enredarlos para que participen” (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza) o “los migrantes no piden mucho” (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza) reflejan un imaginario asistencialista, en el que la persona migrante es vista como sujeto pasivo, necesitado de guía.

Esta mirada condiciona el propio campo social, configurándolo como un espacio en el que el poder simbólico se distribuye de manera desigual: quienes poseen mayor capital institucional o cultural definen los términos de la inclusión.

El análisis empírico permite distinguir al menos dos grandes perfiles dentro del campo social rural. Por un lado, un grupo de personas excluidas por el sistema de bienestar y burocrático, y socialmente segregadas; por otro, aquellas que se consideran plenamente integradas en el Estado y la sociedad, a pesar de las dificultades personales.

El primer grupo suele estar compuesto por personas migrantes en situación administrativa precaria, familias gitanas o hogares monomarentales con escaso acceso a recursos públicos. Para ellos, la participación comunitaria es mínima o inexistente, y la vida cotidiana transcurre en los márgenes institucionales. Como se indica en una entrevista

“hay gente que vive completamente fuera de los circuitos: no van al médico, no piden ayudas, no participan en nada porque no saben o porque sienten que no son bienvenidos”. (Entrevista técnica, Verín)

El segundo grupo, integrado por personas que han logrado establecer vínculos sólidos con vecinos autóctonos, presenta trayectorias más estables. No obstante, incluso en estos casos, la inclusión depende del reconocimiento personal y no de un marco colectivo de igualdad. Como aparece en alguna entrevista

“Yo aquí estoy bien porque me conocen, porque saben quién soy. Si llegas nueva, cuesta mucho que te abran las puertas”. (Entrevista migrante, Verín)

Se observa como el capital social —entendido como red de relaciones de confianza— opera como un recurso clave pero desigual, acumulado de manera diferenciada según la trayectoria, el origen y el tiempo de residencia.

La mayoría de las profesionales entrevistadas afirma que no perciben racismo en su espacio de intervención. Sin embargo, esta ausencia de percepción no implica ausencia de racismo. Lo que emerge, más bien, es una forma de racismo estructural y cotidiano que se oculta tras el discurso de la buena convivencia.

La falta de herramientas conceptuales y protocolos institucionales para abordar el racismo produce una falsa percepción de convivencia entre iguales, como si no fuera un problema estructural. Este desconocimiento no solo invisibiliza las desigualdades, sino que también desplaza la responsabilidad hacia las propias víctimas, atribuyendo las dificultades de integración a su falta de participación o adaptación cultural.

La segregación espacial y simbólica de la población gitana constituye un ejemplo paradigmático. En este sentido, la comunidad gitana expresa cuestiones como qué:

“Es curioso que la mayoría de gitanos vivimos a las afueras de los pueblos y ciudades, parece que nos envían a propósito a las afueras para que no molestemos”. (Entrevista racializada, La Safor)

Este tipo de afirmaciones muestran que la exclusión no se limita a la falta de recursos materiales, sino que también implica una frontera simbólica, un límite de pertenencia social que sigue vigente en el imaginario rural.

El papel de las redes sociales —en su sentido más literal y relacional— emerge como uno de los elementos centrales del campo social. En contextos rurales, donde las instituciones son débiles y la densidad relacional es alta, el acceso a las redes determina en gran medida las posibilidades de integración o exclusión.

Quienes llegan acompañados de familiares o conocidos disponen de un soporte inicial que facilita su asentamiento

“Venir con alguien ya aquí ayuda mucho, te dicen dónde alquilar, te ayudan a buscar trabajo, te presentan a la gente”. (GD, Alt Maestrat)

En cambio, quienes carecen de esas conexiones enfrentan mayores obstáculos para acceder a vivienda o empleo, y quedan atrapados en circuitos de soledad y espera.

Entre la población gitana, las redes familiares y de vecindad constituyen un capital social de enorme valor simbólico y material, la disposición de mayor apoyo social y sustento entre familiares y amistades suele ser característico del pueblo gitano, aunque la pobreza suponga la realidad material de la mayoría. Estas redes operan como estrategias de supervivencia colectiva, pero al mismo tiempo pueden limitar la movilidad social cuando se configuran como círculos cerrados, reforzando la distancia con el entorno mayoritario.

En el caso de las personas migrantes, las redes también funcionan como refugio y como frontera. En los pueblos, es común que las relaciones se organicen por nacionalidades

“ Los argentinos se agrupan, los colombianos se agrupan... sí que se mezclan entre ellos, pero sí que les ves con sus grupos”. (Entrevista técnica, Carrión de los Condes)

Esta tendencia responde tanto a afinidades culturales como a la necesidad de protección simbólica frente a un entorno que no siempre resulta acogedor. Sin embargo, la contrapartida es la fragmentación del tejido comunitario y la persistencia de vínculos débiles con la población autóctona.

El capital social —los recursos derivados de las relaciones y la confianza mutua— es un bien escaso y en disputa en el campo social rural. En territorios donde el acceso a recursos materiales e institucionales es limitado, la pertenencia a determinadas redes define las oportunidades de participación, empleo y reconocimiento.

Las personas con mayor capital social local —autóctonos, miembros de asociaciones históricas, cargos públicos o mediadores culturales— detentan una posición dominante en el campo. Su capacidad para decidir qué iniciativas se consideran “comunitarias”, quién puede participar y en qué condiciones, reproduce un orden simbólico jerárquico.

Para quienes llegan de fuera, la inserción en estas redes requiere tiempo, esfuerzo y legitimación. La confianza, más que institucional, es personal.

“ Aquí la gente se fía cuando te ve todos los días, cuando sabe que tus hijos van al colegio, que trabajas. Hasta entonces, te observan” (Entrevista migrante, El Bierzo)

Este proceso de vigilancia social se convierte en un mecanismo informal de control, a través del cual la comunidad regula el acceso al reconocimiento.

El capital social se convierte así en una forma de poder simbólico: quienes lo poseen pueden representar la “voz del pueblo” o definir las fronteras de la comunidad; quienes carecen de él quedan relegados a los márgenes, incluso si participan activamente en el espacio local. Esta lógica explica por qué algunas personas migrantes, pese a su implicación en actividades culturales o sociales, siguen siendo percibidas como “externas” o “recién llegadas”, aun después de años de residencia.

En el plano generacional, los jóvenes migrantes constituyen un grupo intermedio que encarna tanto el potencial como los límites de la integración. Los jóvenes que llegaron durante la infancia o adolescencia han logrado tejer relaciones de confianza más sólidas

“ Los chavales ya se entienden entre ellos, van juntos al instituto, juegan en los equipos, hablan igual”. (Entrevista técnica, Verín)

Aun así, la realidad es más compleja y la integración simbólica no siempre implica igualdad de oportunidades. Estos jóvenes enfrentan todavía expectativas diferenciadas y sutiles formas de discriminación incluso dentro de los institutos.

“ Creo que la mentalidad de mi abuela, es más abierta que la de los chavales a los que voy a dar los talleres actualmente, y te lo digo así...” (Entrevista técnica, El Bierzo)

La dimensión de género atraviesa de manera transversal el campo social. Las mujeres, tanto migrantes como gitanas, son quienes sostienen la mayor parte de las redes de apoyo y cuidado, configurando un capital social feminizado basado en la reciprocidad y la ayuda mutua.

“ Somos las mujeres las que tiramos del carro, las que nos ayudamos entre nosotras” (GD, Alt Maestrat)

Estas redes femeninas, aunque imprescindibles, tienen un valor social limitado y rara vez son reconocidas institucionalmente.

“ Quieren que estés bien, pero no mejor que ellos”. (GD, Verín)

Se detecta el límite simbólico de la inclusión: se permite la participación siempre que no cuestione las jerarquías existentes. El capital social de las mujeres se tolera, pero no se traduce en poder político ni en acceso a la toma de decisiones.

En conjunto, el campo social y comunitario de las cinco comarcas rurales estudiadas se configura como un entramado denso de relaciones desiguales. La aparente convivencia y la retórica de la comunidad enmascaran un orden social jerarquizado, donde el capital social y simbólico se distribuye de manera asimétrica entre autóctonos, migrantes y población gitana.

Las redes comunitarias operan a la vez como espacios de cuidado y como fronteras de exclusión: protegen, pero también seleccionan; integran, pero jerarquizan, estratifican. En este contexto, la integración no depende únicamente del esfuerzo individual, sino del reconocimiento colectivo y de la apertura real de las estructuras locales.

El capital social —en su doble dimensión de recurso y de poder— emerge como el principal regulador de la vida comunitaria. Su desigual distribución explica por qué algunas personas logran insertarse y otras permanecen invisibles.

En cuanto a la cuestión simbólica (cuando se habla de estatus) cabe mencionar que no todas las comunidades son percibidas de la misma manera. El trabajo de campo muestra que dependiendo de cuestiones como; el idioma, la religión, la cultura, la diáspora (en países como Argentina o Uruguay existen una gran diáspora española e italiana, haciendo que la integración de esas personas sea mucho más sencilla) o la etnia son claves para entender cómo se perciben a determinadas comunidades. Se da una estratificación jerárquica del estatus por los autóctonos y eso construye la alteridad y la propia percepción de su propia comunidad. Dicho de otro modo, las personas racializadas detectan que comunidades tienen una mejor percepción o peor y tratan de diferenciarse.

En los GD con personas racializadas aparece como las comunidades del este de Europa tratan de poner límites y diferencias con las personas magrebí, las personas magrebí tratan de diferenciarse de la comunidad gitana y la comunidad gitana hace valor su españolidad para diferenciarse del extranjero. Una suerte del “penúltimo contra el último” que impide ejercer solidaridad entre personas que sufren vulnerabilidades parecidas para tratar de integrarse en la comunidad dominante.

“en una reunión en León, una mujer colombiana comenzó a pedir, que si comida, que si ropa, que si pasaban frio... y de repente cuando le toca el turno de palabra a una mujer que estaba también en la misma reunión, dice “... nosotros los peruanos y los ecuatorianos, no venimos a pedir como los colombianos y los venezolanos...” y yo como colombiana me sentí como si me hubieran dado una cachetada, y entonces digo, ¿Por qué lo hacemos si todos estamos en las mismas condiciones? ...” (Entrevista migrante, El Bierzo)

6.5. Campo político y participativo

El campo participativo y político en las comarcas rurales analizadas se configura como un espacio caracterizado por la ausencia de participación efectiva de los grupos subalternos —en particular, de las personas migrantes y de la población gitana— y por la presencia de barreras estructurales, culturales y simbólicas que limitan su acceso a los derechos de ciudadanía. A partir de los testimonios recogidos, se observa un patrón recurrente: la participación institucional y comunitaria no solo es baja, sino que está mediada por relaciones de desigualdad que hacen que la implicación política se perciba como algo ajeno o inalcanzable.

A nivel empírico, las entrevistas muestran que la mayoría de personas migrantes no participan en asociaciones, colectivos ni espacios de decisión local. Tal como se recoge en los grupos de discusión, ninguna de las personas participantes verbaliza participar en las dinámicas comunitarias del municipio ni pertenecer a ninguna asociación o agrupación local. Solo se mencionan casos excepcionales, como el de una mujer que participa en una comunidad religiosa y que afirma haber encontrado un gran apoyo.

“un gran apoyo en los momentos difíciles desde que llegué a España, sintiéndome querida y respetada más incluso que en mi propia familia” (GD, Carrión de los Condes)

Este tipo de participación, sin embargo, no se orienta hacia la acción política o la transformación social, sino hacia el acompañamiento y la contención emocional, lo que evidencia que el espacio de pertenencia y voz sigue desplazado al ámbito privado o espiritual.

En general, el trabajo de campo sugiere que la política se percibe como un territorio de otros, reservado a los autóctonos o a quienes “pertenecen de verdad” a la comunidad. Se constata una aceptación de la subordinación impuesta resultado de experiencias reiteradas de discriminación y desconfianza institucional. Las personas entrevistadas expresan con frecuencia el sentimiento de ser “ciudadanos de segunda clase”, lo que se traduce en una renuncia simbólica a participar.

“ En los hospitales bien...No son como por ejemplo en la calle o entras en un bar. Yo muchas veces me pasa eso, entro por ejemplo a un bar a tomar un café y una señora tiene el bolso al lado y nada más que te ve... (hace el gesto de cogerlo rápidamente y guardarlo) o un móvil. Hostia si te hace eso uno en la cara pues te duele, me da una rabia. Para decirle oye que pasa, porque haces eso, que te ves yo soy un ladrón. Y puedo estar yo mejor que esta gente y si estoy. Ellos igual ven a uno malo y piensan que todos somos malos. No, tienes que conocer la gente saber cómo están...En la calle, en los bares, en las oficinas te ven un extranjero y pasa cosas que no...” (GD, Carrión de los Condes)

Esta vivencia cotidiana genera una relación ambigua con lo público: la participación se asocia al riesgo de exposición, a la sospecha y a la vulnerabilidad.

De hecho, las profesionales entrevistadas reconocen que, aunque algunas personas migrantes colaboran con entidades sociales donde participan en las actividades que se realizan, pocas sienten que deban alzar la voz frente a la discriminación o el maltrato, salvo en situaciones puntuales que les afectan directamente. Las quejas formales o protestas se limitan a casos concretos, relacionados con problemas personales o familiares, sin transformarse en una acción colectiva o en una reivindicación general. Esta fragmentación de la acción política responde a un marco de supervivencia cotidiana en el que la prioridad no es la participación, sino la estabilidad legal, laboral y económica.

El análisis de las entrevistas permite identificar tres mecanismos estructurales que explican esta débil participación política: la precariedad material, la exclusión institucional y la violencia simbólica interiorizada.

En primer lugar, la precariedad material y la falta de tiempo constituyen una barrera directa para la implicación ciudadana. La mayoría de los perfiles entrevistados encadenan jornadas laborales extensas, trabajos temporales o múltiples empleos, lo que hace inviable dedicar tiempo a la participación social o política. Las técnicas de los centros de desarrollo rural subrayan que el ritmo de vida laboral les impide participar en actividades, fiestas o dinámicas de la comunidad, puesto que apenas disponen de tiempo libre. Esta incompatibilidad entre trabajo y participación es especialmente intensa en el caso de las personas migrantes que, además, cargan con responsabilidades familiares transnacionales y con la necesidad de enviar remesas.

En segundo lugar, el sistema institucional se presenta como un espacio opaco y lento que no fomenta la confianza ni el sentido de pertenencia. Los trámites de extranjería son descritos como opacos, lentos y mal coordinados, con citas que se retrasan meses y muchos documentos que pierden validez en el proceso. Las entrevistas denuncian una ausencia de información clara y accesible, así como una dependencia excesiva de las ONGs como mediadoras entre las personas migrantes y la administración. Una técnica lo sintetiza:

“la exclusión legal no es un fallo puntual, sino un mecanismo que reproduce desigualdad” (Entrevista técnica, Carrión y Ucieza)

El resultado es que la administración pública se convierte en un campo de exclusión burocrática, donde el acceso a los derechos básicos se experimenta como un recorrido incierto. Esta experiencia institucional erosiona cualquier expectativa de participación democrática, ya que las personas afectadas no se reconocen como sujetos con voz legítima, sino como meros solicitantes. La relación con el Estado se da, entonces, bajo la forma de una ciudadanía tutelada, donde los procedimientos administrativos sustituyen el reconocimiento político.

En tercer lugar, las entrevistas revelan la persistencia de una violencia simbólica interiorizada que lleva a aceptar la desigualdad como algo natural o comprensible.

“Yo digo, sí señora, no señora... pero me dicen: que no me digas sí, que no me digas usted. Y yo, ay, Dios mío, señora... es mi forma de hablar, es mi educación. Yo no le estoy faltando al respeto, yo le digo, es que es mi forma de hablar, es mi educación hacer a las personas mayores. Y se queda, pues, ah, pero es que, dime así. Entonces yo, uff, yo digo, ay, Dios mío, señora, yo quiero... Pero pues es cultura, o sea... Es como el respeto que nos inculcaron nuestros padres antes. Pero entonces se da uno de cuenta que se molesta.” (GD, Carrión y Ucieza)

“Esta expresión de “es normal que no votemos” demuestra como estas primeras generaciones de migrantes, completamente asentadas, están más centradas en sobrevivir y en poder enviar dinero a casa, que en que su propia migración tenga un sentido, que pueda acceder a derechos básicos o a una igualdad de condiciones en el trato aquí...” (Entrevista migrante, La Safor)

Esta resignación evidencia un proceso de dominación simbólica que convierte la exclusión política en un hecho moralmente aceptado, y que impide transformar la experiencia de discriminación en una demanda de derechos.

Las primeras generaciones de migrantes tienden a estar más centradas en sobrevivir y enviar dinero a casa que en que su propia migración tenga un sentido político o de derechos. Así, el tiempo vital se orienta hacia la subsistencia, mientras la acción colectiva queda desplazada o delegada en otros actores —ONGs, iglesias, trabajadoras sociales— que median entre la comunidad y el Estado.

En el caso de la población gitana, el panorama participativo es aún más complejo. Aunque se mantiene cierto asociacionismo histórico, este carece de relevo generacional y su capacidad de incidencia es limitada. Las entrevistas señalan que en algunos municipios se han producido casos de sobornos o favoritismos hacia el pueblo gitano en tiempos de elecciones, lo que muestra una instrumentalización política del grupo, tratado como arma electoral. Esta lógica clientelar refuerza la percepción de que la participación política no responde a intereses colectivos, sino a intercambios utilitaristas que deslegitiman el valor de la acción comunitaria.

Simultáneamente, la población migrante es utilizada en sentido inverso: como chivo expiatorio o como recurso discursivo por parte de fuerzas políticas xenófobas. Ambas dinámicas —cooptación y exclusión— definen un mismo proceso de desposesión política, donde los sujetos racializados son objeto de representación, pero no agentes de decisión.

El debilitamiento de las asociaciones migrantes, que en el pasado habían suplido las carencias institucionales, acentúa esta situación. Estas asociaciones fueron sustituidas por recursos públicos insuficientes, a través de una burocracia desesperanzadora y sin ofrecer un trato humano, tal y como se ha detectado en el trabajo de campo. La desaparición del tejido asociativo deja un vacío que el sistema público no ha sabido llenar, y que ha convertido la acción política migrante en una presencia intermitente y desarticulada.

En el ámbito sindical, el diagnóstico es similar. La afiliación sindical es muy baja entre la población migrante y prácticamente nula entre la gitana. Los factores son múltiples: miedo, precariedad, desconocimiento de los derechos laborales, idioma y falta de tiempo. Incluso quienes consiguen un contrato laboral estable carecen de información sobre los mecanismos de defensa colectiva. Durante el trabajo de campo, las profesionales técnicas subrayan que la población migrante es un perfil que necesita del sindicato, pero que no lo percibe como un espacio propio. De este modo, la defensa laboral se reduce a estrategias individuales o informales, sin articulación colectiva.

En la dimensión institucional, las entrevistas con personal técnico y con personas migrantes y gitanas ponen de relieve un patrón estructural: la actuación policial no aparece como garante de derechos ni como mediadora de conflictos, sino como agente de control y frontera simbólica del Estado. Las narrativas recogen experiencias que se repiten en distintas comarcas: identificaciones arbitrarias, peticiones de documentación fuera de contexto y un trato que oscila entre la desconfianza y la sospecha. Durante el trabajo de campo se ha detectado que los cuerpos de seguridad reconocen no tener protocolos adecuados más allá del control de irregularidades. Esta ausencia de pautas formativas y éticas consolida una visión securitaria de la extranjería, donde la figura del migrante o del gitano se asocia al riesgo y no a la ciudadanía.

Las experiencias relatadas por las personas entrevistadas apuntan en esta dirección.

“ Joder, perdona por la palabra. Pues siempre, hace poco, la semana pasada. Yo creo que ve extranjero y te manda parar. Lo que vemos nosotros no se ellos lo que piensan. Yo creo que nada más que te vean un extranjero, para. Carnet de conducir, DNI todo. Hace

poco me han parado la rotonda...me ha mirado el coche para acá para allá...Yo me da igual que me paren lo tengo todo bien...me ha mirado el coche, ¿tienes algo? No tengo nada, tampoco estoy en cosas que...” (Entrevista migrante, Carrión de los Condes)

Estas prácticas, que se reproducen en diferentes localidades, muestran cómo la policía no actúa como una institución de protección, sino como un filtro que selecciona quién merece atención y quién debe ser vigilado.

Esa confusión entre control migratorio y seguridad pública convierte a la policía en una frontera móvil del racismo institucional. No es sólo la ley la que excluye, sino la forma cotidiana en que se aplica. La ausencia de formación específica en diversidad cultural, de intérpretes o de mediadores interculturales, refuerza la discrecionalidad del agente, que opera con sus propios prejuicios o intuiciones. De este modo, la relación entre las comunidades racializadas y los cuerpos de seguridad se define por la asimetría: el agente posee la autoridad, la palabra y la credibilidad; la persona migrante o gitana, en cambio, debe justificar su presencia, su conducta o incluso su derecho a hablar.

En el trabajo de campo, varios profesionales locales señalaron que los cuerpos de seguridad no solo carecen de formación, sino que mantienen una cultura corporativa que legitima la distancia y el trato desigual. Las referencias a “protocolos de control”, “falta de medios” o “sobrecarga de trabajo” funcionan como excusas institucionales que invisibilizan el racismo cotidiano. Esta posición reproduce la idea de que la población migrante constituye una alteridad que debe ser gestionada, vigilada o contenida.

El impacto de estas prácticas sobre el campo participativo es profundo. En primer lugar, generan miedo institucional: la mera presencia policial en oficinas, escuelas o espacios públicos produce retraimiento y silencio.

Varias personas entrevistadas reconocen haber renunciado a presentar denuncias por temor a que el procedimiento derive en la revisión de su situación administrativa, como una sensación de acceso desigual los recursos administrativos e incluso de control ilícito de los mismo.

“Las citas se las reparten entre gestores, abogados... tú no puedes acceder. Te dicen que entres a las 12 de la noche y no funciona.” (GD, Carrión y Ucieza)

Este miedo se traduce en una autoexclusión política: el sujeto deja de reclamar derechos o de intervenir en la esfera pública porque percibe que el coste es demasiado alto.

En segundo lugar, la práctica policial refuerza una ciudadanía jerárquica. En los municipios rurales donde se llevó a cabo el estudio, la policía se convierte en uno de los principales referentes institucionales, especialmente en contextos donde la administración es escasa. Su papel excede lo policial: representa la autoridad del Estado en su forma más visible. Pero al ejercer esa autoridad desde la sospecha, se reconfigura el vínculo entre ciudadanía y pertenencia, estableciendo una distinción tácita entre quienes son “de aquí” y quienes deben demostrar

constantemente su legitimidad para estar. Esta frontera simbólica tiene efectos materiales: define quién puede ocupar el espacio público sin ser interpelado, quién puede organizarse políticamente, quién puede hablar sin ser sospechoso.

En tercer lugar, la actuación policial afecta también a las redes de confianza dentro de las propias comunidades. La desconfianza hacia la policía se extiende a las instituciones en general, lo que debilita los lazos con los servicios sociales, los ayuntamientos o las asociaciones locales. La experiencia acumulada de trato desigual configura una memoria colectiva de agravio que circula en las conversaciones, las familias y los lugares de encuentro. En muchos pueblos, la policía no sólo simboliza el control, sino la imposibilidad de defenderse frente a abusos. Esa percepción erosiona cualquier intento de fomentar participación o diálogo institucional: participar se percibe como exponerse.

Desde un punto de vista sociológico, la policía actúa como una institución productora de orden simbólico, en la que el racismo y la desigualdad no son excepciones, sino elementos funcionales a su práctica. La falta de mediadores o intérpretes no es una mera omisión técnica, sino un signo de la falta de voluntad de reconocer al otro como interlocutor legítimo. En las entrevistas, los propios agentes reconocen “no tener herramientas” para tratar con personas extranjeras. Pero esta carencia, lejos de neutralizar la desigualdad, la profundiza: al no existir protocolos claros, la arbitrariedad se convierte en norma. La interpretación del agente —su tono, su mirada, su paciencia o su prejuicio— determina el resultado del encuentro. En ese espacio de interacción, el poder se ejerce sin contrapesos.

Esta dinámica se agrava en los contextos rurales, donde la visibilidad es mayor y la diversidad poblacional, menor. En pueblos pequeños, una identificación o una discusión con la policía adquiere una dimensión pública inmediata: todo el mundo la ve, se comenta, circula. Así, la violencia institucional se amplifica socialmente y refuerza estigmas previos. La población gitana, por ejemplo, se ve doblemente marcada: por su pertenencia étnica y por la sospecha heredada. La policía, al operar bajo esa misma lógica de sospecha, consolida la distancia y legitima la idea de que la población gitana o migrante no pertenece plenamente a la comunidad política.

El resultado global es una erosión de la esfera pública: la relación entre ciudadanía y autoridad se degrada, el derecho se convierte en control, y la participación se reduce al mínimo. El campo participativo local queda así atravesado por el miedo, la desconfianza y la resignación. La falta de participación no es un rasgo cultural ni una cuestión de voluntad individual: es el efecto acumulativo de una estructura institucional que administra la exclusión bajo la apariencia de legalidad.

Así, el campo político y participativo rural se sostiene sobre una paradoja estructural: se demanda integración, pero no se ofrecen canales reales de participación. Las personas migrantes y gitanas son invitadas a “adaptarse” y “convivir”, pero no a deliberar ni a decidir. El discurso institucional sobre la inclusión se queda en el plano formal, mientras las prácticas burocráticas reproducen exclusión. La opacidad de los procedimientos, la lentitud administrativa y el lenguaje técnico refuerzan la asimetría entre ciudadanía plena y ciudadanía condicionada.

Este conjunto de barreras configura una forma específica de racismo institucional y burocrático, que no se expresa abiertamente en términos de rechazo, sino en la acumulación de pequeños obstáculos, silencios y rigideces que desincentivan la participación. Como se ha señalado en las entrevistas, la exclusión no opera solo desde la ley, sino desde su implementación desigual, su falta de empatía y su descoordinación. En este contexto, la exclusión no se ejerce mediante la prohibición, sino mediante la indiferencia.

A nivel simbólico, la falta de representación y la invisibilidad política consolidan un círculo vicioso: al no participar, los grupos subalternos son percibidos como apáticos o desinteresados; esta percepción, a su vez, justifica la ausencia de políticas dirigidas a su empoderamiento. En realidad, la baja participación no es una causa, sino una consecuencia de un de que los recursos políticos y participativos estén en manos de los grupos sociales autóctonos.

Por ello, el campo participativo y político en las comarcas rurales estudiadas se caracteriza por una ciudadanía fragmentada y jerarquizada, donde la voz política de las personas migrantes y gitanas se encuentra silenciada por múltiples mediaciones institucionales. Las prácticas de resistencia son puntuales, individuales y reactivas, más vinculadas a la defensa de la dignidad personal que a la acción colectiva. El resultado es un campo político de baja intensidad democrática, sostenido por la desigual distribución del capital político, la precariedad estructural y la naturalización de la exclusión.

La participación, en este contexto, no puede entenderse únicamente como ausencia de implicación, sino como el efecto de un proceso estructural de desposesión política. Los testimonios muestran que la voluntad de participar existe, pero choca contra un sistema que no reconoce su legitimidad. La superación de esta brecha requiere no solo abrir canales formales de participación, sino transformar la cultura institucional, redistribuir el capital político y reconocer las formas de participación subalterna —religiosa, comunitaria, relacional— como prácticas políticas en sí mismas, aunque no encajen en los formatos hegemónicos de la democracia local.

7. Conclusiones

El análisis conjunto de las dimensiones económica, laboral, social, institucional, simbólica y participativa en las comarcas rurales estudiadas revela un escenario marcado por la vulnerabilidad estructural de las personas migrantes y gitanas, cuya vida cotidiana se desarrolla en condiciones de desigualdad persistente. La precariedad laboral, la segregación ocupacional y las limitadas posibilidades de movilidad social ascendente configuran un campo económico profundamente estratificado, donde estos grupos quedan relegados a nichos de trabajo mal remunerados o intensivos en esfuerzo físico, y sin garantías de estabilidad.

A ello se suma una segmentación de género que reproduce desigualdades previas: las mujeres migrantes concentran su presencia en labores de cuidado y limpieza, mientras que los hombres se ubican en sectores como la hostelería, el campo o la construcción, casi siempre en posiciones subordinadas. Las mujeres migrantes que se dedican al sector de los cuidados y la limpieza son el perfil más claro de vulnerabilidad en el ámbito rural, personas que recién han llegado al país, con situaciones de legalidad complejas y con redes sociales limitadas.

Estos procesos se ven reforzados por dinámicas de deshumanización e invisibilización que atraviesan el campo social. Las narrativas recogidas evidencian cómo la mirada social dominante sitúa a las personas migrantes y gitanas en posiciones de alteridad y sospecha, dificultando su reconocimiento como sujetos plenos de derechos. Esta desigualdad simbólica se articula con formas de exclusión institucional que afectan al acceso a la vivienda, los servicios públicos, la información administrativa y los recursos de bienestar. El sistema burocrático opera como un mecanismo de control más que como un sistema de garantías, generando una experiencia cotidiana de inseguridad jurídica, incertidumbre y dependencia de intermediarios. A parte, el no reconocimiento del fenómeno social acaba provocando que las comunidades racializadas no sientan que pertenecen de pleno derecho al ámbito donde desarrollan su vida.

En este marco, el campo participativo y político emerge como una de las dimensiones donde la exclusión se manifiesta con mayor claridad. Las comarcas rurales analizadas se caracterizan por una participación muy baja de los grupos racializados y por la existencia de barreras estructurales, culturales y simbólicas que impiden su acceso a los espacios de decisión. A pesar de los discursos institucionales sobre integración, la participación efectiva de personas migrantes y gitanas es prácticamente inexistente, no por falta de interés individual, sino por la consolidación de estructuras y dinámicas desiguales.

Las entrevistas y grupos de discusión muestran un patrón claro: la mayoría de personas migrantes no participan en asociaciones locales, colectivos ni órganos comunitarios. La acción

colectiva se sustituye por formas de acompañamiento emocional o espiritual, generalmente en comunidades religiosas. Esta forma de participación subalterna refleja un modelo donde la pertenencia se construye en el ámbito privado, mientras la esfera pública permanece limitada a la ciudadanía autóctona. La percepción extendida de ser “ciudadanos de segunda clase”, unida a las reiteradas experiencias de discriminación y desconfianza institucional, conforma un marco subjetivo en el que la implicación política se percibe como algo ajeno o inalcanzable.

A esta exclusión simbólica se suma la precariedad material: largas jornadas, múltiples empleos y responsabilidades familiares transnacionales que hacen inviable la participación. El tiempo disponible es un privilegio del que no disponen quienes viven en condiciones de subsistencia. Paralelamente, el sistema institucional profundiza la distancia entre ciudadanía y derechos: trámites lentos, citaciones demoradas, falta de información clara y una dependencia excesiva de las ONGs como mediadoras. La administración opera, así, como un campo opaco que reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.

Estas desigualdades se acaban naturalizando e interiorizando. Muchas personas entrevistadas consideran “normal” no poder votar o no participar políticamente, reproduciendo discursos que naturalizan la desigualdad y que legitiman la idea de que la política es un ámbito reservado para “la gente de aquí”. Esta aceptación resignada de un orden jerárquico evidencia cómo la dominación se internaliza hasta convertirse en sentido común, dificultando la articulación de demandas colectivas.

El papel de la policía y los cuerpos de seguridad refuerza esta desposesión política. Las prácticas policiales recogidas en el trabajo de campo muestran un patrón de controles arbitrarios, sospecha sistemática y trato desigual, donde la figura del migrante o del gitano se asocia a la irregularidad o al riesgo. Esta actuación securitaria convierte a la policía en una frontera simbólica del Estado, generando miedo institucional y desincentivando la denuncia. La propia presencia policial en espacios comunitarios produce retraimiento, especialmente en contextos rurales donde la visibilidad social es alta y todo acto público se magnifica.

Las consecuencias sobre el campo participativo son profundas: la población migrante renuncia a denunciar abusos, evita exponerse y limita sus acciones a formas de defensa individual. La población gitana, por su parte, se enfrenta a dinámicas de clientelismo electoral que instrumentalizan su participación, reduciéndola a un intercambio utilitarista carente de incidencia real. La debilidad del tejido asociativo —antes más activo— y su sustitución por recursos públicos insuficientes agravan este panorama, dejando a estas comunidades sin estructuras propias de representación y con una presencia política fragmentada y discontinua.

Este conjunto de factores configura un campo participativo y político de baja intensidad democrática, sostenido por la desigual distribución del capital político y la naturalización de la exclusión. La falta de participación no debe interpretarse como apatía, sino como el resultado de un proceso estructural de desposesión que impide transformar la experiencia de discriminación en una demanda de derechos. En este contexto, la participación no es una elección individual sino una imposibilidad socialmente producida.

Por último, cabe destacar que dentro de las diferentes situaciones de vulnerabilidad y discriminación no todos los colectivos son señalados por igual. Existe una diferenciación jerárquica dependiendo del idioma, del estatus del país, del pasado migrante (si son descendientes de europeos o no como en el caso de algunos países de América latina), de la religión y de la etnia. Mostrando que las categorías se van superponiendo y que hay que tener en cuenta los diferentes campos sociales para entender el conjunto del racismo estructural.

Después de todo el trabajo de campo y el análisis de los datos obtenidos se puede concluir que el racismo tiene un componente estructural, es decir es un vector de dinámicas sociales, normas y pautas culturales que establece una estratificación social organizativa de la vida social en sus diferentes campos. Esto, hace que sea especialmente funcional en el campo laboral, estableciendo un capital humano (una mano de obra) especialmente barata y que no ejerce derechos de ciudadanía.

Dado su carácter estructural no es, por tanto, una acción concreta de individuos si no una forma de funcionar y de entender el mundo interiorizada colectivamente que se reproduce en diferentes áreas de la vida sin que sea perceptible muchas veces. Este estudio, como conclusión, pone de manifiesto en que áreas y prácticas concretas se ha detectado que el racismo estructural se deja entrever con el objetivo de mejorar la intervención social y el desarrollo de los municipios rurales para seguir construyendo comunidades cohesionadas.

8. Recomendaciones y buenas prácticas

Ante esta realidad, desde los CDR y COCEDER se llevan a cabo una serie de recomendaciones para mejorar la realidad de las personas racializadas en el ámbito rural, uno de los agentes clave de la nueva ruralidad y del día a día de la intervención de los CDR.

Se proponen líneas de intervención que hagan hincapié en la sensibilización con la situación de las personas racializadas, éstas deberían girar en torno a dos agentes claves; por un lado, el personal técnico que convive con la existencia de este fenómeno, sobre todo aquel que trabaja en la administración pública y el tercer sector. Reconocer y mejorar herramientas de intervención no cuestiona en ningún momento la profesionalidad del personal técnico si no que al contrario mejora nuestra intervención como sociedad en problemáticas complejas. Por otro lado, la sensibilización para con la ciudadanía, haciéndolos partícipes del estado de la cuestión. Esto se puede traducir en seguir mejorando las redes con las universidades para acceder a formaciones, a nuevas investigaciones, etc. Además, seguir con la investigación aplicada e impulsada desde las entidades del tercer sector permite seguir con la mejora de herramientas como sociedad.

Otra propuesta es la consolidación y la ampliación de la acción comunitaria. La acción comunitaria entendida como un proceso participativo orientado a fortalecer los vínculos sociales, mejorar la calidad de vida y promover la organización colectiva para resolver problemas comunes.

La comunidad no se entiende solo como un territorio, sino como un conjunto dinámico de relaciones, capacidades y recursos. El papel de los profesionales consiste en facilitar —no sustituir— la acción de la ciudadanía, reforzando la autonomía, la corresponsabilidad y la cohesión social.

En este sentido, aplicar las propuestas de Marchionni (2007), con una participación real y continuada, no solo consultiva, el diagnóstico compartido del territorio y sus necesidades, el empoderamiento para que los grupos creen respuestas sostenibles, el trabajo en red entre ciudadanía, entidades sociales e instituciones y los procesos inclusivos que integren diversidad y eviten la reproducción de desigualdades siguen siendo un metodología clave para combatir el racismo como relación social estructural.

Justamente en la línea de trabajo en red con agentes sociales aparece la idea de la colaboración con sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos laborales y sociales. A lo largo del estudio se detecta falta de información básica sobre derechos y falta de herramientas de detección y canalización de demandas. Esto lastra la intervención y la mejora de la vida de los

vecinos racializados y establece una ciudadanía a dos niveles; los que conocen y ejercen sus derechos y aquellos que no saben que tienen derechos.

Otro punto clave es la labor específica con jóvenes. Tanto la acción comunitaria como en la presencia en redes sociales aparecen como clave. Una estrategia comunicativa que ponga en el centro la capacidad de poder hacer virales discursos que pongan en el centro de la igualdad de derechos, así como profesionales que puedan llevar a cabo estas estrategias.

Para finalizar se propone poner en valor y seguir con buenas prácticas que ya se llevan a cabo; espacios de encuentro intercultural, con información a la ciudadanía, seguir con la investigación aplicada y la formación continua de profesionales y ciudadanía. De estas buenas prácticas depende el futuro de nuestras comunidades rurales.

Bibliografía

- Anglo, B. (2022, 29 de enero). Estat espanyol: Migrants i presons. Viento Sur.
- Beck, U. (1992). Risk society. SAGE Publications. (Versión en castellano: La sociedad del riesgo. Paidós, 1998).
- Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.
- Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.
- Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.
- Bourdieu, P. (2008). Cuestiones de sociología (E. Martín Criado, Trad.). Akal.
- Caminando Fronteras. (2024). Informe Monitoreo Derecho a la Vida 2024.
- Cea D'Ancona, M. Á., & Valles Martínez, M. S. (2021). Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: Identidad y acceso a derechos. Ministerio de Igualdad.
- Colectivo IOÉ (Pereda, C., Prada, M. Á., Actis, W., & Ortí, M.). (2010). Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España: Exploración cualitativa (Opiniones y Actitudes, n.º 64). Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Equipo Investigador de Red2Red. (2025). El impacto del racismo en España: Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024. Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. <https://cpage.mpr.gob.es>
- El País. (2025, 1 de noviembre). La extrema derecha mantiene uno de cada tres gobiernos europeos pese al varapalo de Wilders en los Países Bajos. <https://elpais.com/internacional/2025-11-01/la-extrema-derecha-mantiene-uno-de-cada-tres-gobiernos-europeos-pese-al-varapalo-de-wilders-en-los-paises-bajos.html>
- Fundación Cepaim. (2023). I Informe sobre el estado de las migraciones y la convivencia intercultural en España. CONVIVE Fundación Cepaim.
- Garcés, H. F. (2016). El racismo antirom/antigitano y la opción decolonial. Tabula Rasa, 25, 225–251.
- Grosfoguel, R. (2012). El concepto de “racismo” en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿Teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser? Tabula Rasa, 16, 79–102.
- Informe de investigación: racismo estructural en libros de texto. (2021–2022). SOS Racismo Madrid.
- Mahía Casado, R., & Medina Moral, E. (2022). Informe sobre la integración de la población extranjera en el mercado laboral español. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

- Marchionni, M. (2007). Acción comunitaria y trabajo social: Metodologías participativas para la intervención en territorio. Espacio Editorial
- Mellino, M. (2021). Gobernar la crisis de los refugiados: Soberanismo, nacionalismo, racismo y acogida en Europa. Traficantes de Sueños.
- Ministerio del Interior. (2023). Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023. https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Informe_evolucion_delitos_odio_Espana_2023.pdf
- Oxfam Intermón. (2025). El saqueo continúa: Pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo.
- Oxfam Intermón. (2025). Vivir la desigualdad: Encuesta sobre desigualdades típicas en España.
- Parella, S. (2020). Raza, etnia y racismos en un mundo global: Un enfoque sociológico. En R. El Quaroui (Ed.), *Racismo, etnicidad e identidad en el siglo XXI* (pp. 37–60). AnthroPiQa 2.0.
- Pedreño Cánovas, A. (2022). El trabajador etnificado: un mapa conceptual para la sociología del trabajo. *Sociología del Trabajo*, 100, 45–58. <https://doi.org/10.5209/stra.81999>
- Público. (s.f.). Tres grupos parlamentarios y 200 eurodiputados de extrema derecha: así es el nuevo Parlamento Europeo. <https://www.publico.es/internacional/tres-grupos-parlamentarios-200-eurodiputados-extrema-derecha-asi-nuevo-parlamento-europeo.html>
- Ruiz-Morales, M. L. (2018). La evolución de la población reclusa española en los últimos treinta años: Una explicación integral. *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 71(1), 403–490.
- SOS Racisme. (2024). Abordatges innovadors al problema del racisme en el camp jurídic: Noves articulacions entre teoria i pràctica. Informe Racisme Judicial 2024.
- Standing, G. (2014). Por qué el precariado no es un “concepto espurio”. *Sociología del Trabajo*, 82, 7–15.
- Provivienda & Andalucía Acoge. (2022). Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales.
- Wright, E. O. (2018). *Comprender las clases sociales* (R. Cotarelo, Trad.). Akal.
- “Sólo pido una cita para explicar mi historia, en Colombia me matarían”. (2022, 17 de diciembre). (Medio no indicado).

Anexos

1. Guion entrevistas técnicos (previa)

1. Presentación y contextualización

- Presentación del entrevistado/a: rol, experiencia y ámbito de trabajo.
- Historia de la entidad: origen, motivaciones y valores.
- Enfoque de trabajo: si es exclusivo con personas migrantes/racializadas o si es parte de un trabajo más amplio.
- Proceso de elaboración de planes de intervención: metodología y estructura.
- Descripción general de la situación de las personas racializadas en las zonas rurales donde trabaja.
- Rol de la entidad/administración en la eliminación del racismo.

2. Trayectorias migratorias y discriminación

- Trayectorias migratorias de los usuarios: diversidad y diferencias entre ellas.
- Momentos clave de intervención: al llegar, durante el proceso migratorio o una vez asentados.
- Necesidades detectadas en relación con el proceso migratorio.
- Situación de personas racializadas españolas: experiencias de discriminación observadas.
- Barreras identificadas para las personas racializadas: tanto las detectadas por los técnicos como las manifestadas por los usuarios.
- Impacto de la discriminación en la integración en comunidades rurales.
- Relación con las comunidades locales: percepción de discriminación objetiva y subjetiva.

3. Percepción y manifestaciones del racismo estructural

- Racismo en el ámbito rural: existencia, particularidades y diferencias con otros contextos.
- Convivencia intercultural versus asimilacionismo: enfoques observados.
- Manifestaciones concretas de racismo en el ámbito rural.
- Mecanismos de perpetuación del racismo.
- Diferencias entre zonas con presencia de la entidad y aquellas sin ella.
- Percepción del racismo por parte de la población racializada y no racializada (jóvenes, mayores, mujeres, hombres, etc.).

4. Acceso a la vivienda

- Situación general de la vivienda en la zona.
- Problemas o facilidades en el acceso a la vivienda.
- Modalidades predominantes de acceso (compra, alquiler, etc.).
- Estado de las viviendas y relación con el proceso migratorio.
- Legalidad en los contratos de vivienda.
- Desafíos específicos para personas racializadas en el acceso a la vivienda.
- Casos observados de trato diferenciado o negación de vivienda por origen o cultura.
- Papel de las entidades del tercer sector en el mercado de la vivienda.

5. Capital social y redes de apoyo

- Influencia de las redes de apoyo (vecinos, asociaciones, amigos) en la integración.
- Iniciativas comunitarias exitosas en fomentar la inclusión: resultados observados.
- Impacto de la falta de redes sociales en la integración y acceso a oportunidades.

6. Administración y jerarquías sociales

- Relación entre la administración pública y las personas racializadas: barreras observadas (médico, despachos municipales, etc.).
- Interacción con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
- Relación con la burocracia y trámites administrativos.
- Manifestaciones de racismo en espacios de toma de decisiones (ayuntamientos, asociaciones, etc.).
- Barreras para la participación de personas racializadas en la vida política, económica o social.

7. Capital económico y condiciones laborales

- Tipos de trabajos que ocupan las personas racializadas: condiciones y regulación.
- Diferencias de género en el acceso y tipo de empleo.
- Situación salarial y nivel de sindicalización.
- Dificultades económicas observadas en estas poblaciones.
- Casos de segregación laboral o discriminación en el empleo.
- Abordaje de estos casos desde instituciones u ONG.

8. Capital cultural y educativo

- Influencia del sistema educativo en la inclusión o exclusión de niños y jóvenes racializados.
- Barreras en el acceso a la educación.
- Programas educativos contra el racismo: resultados observados.

9. Capital simbólico y representación social

- Presencia de líderes comunitarios racializados: percepción y reconocimiento.
- Participación en fiestas locales, eventos y actividades comunitarias.
- Percepción social de las personas racializadas: estereotipos y prejuicios.

- Cambios en la percepción social en los últimos años.
- Referentes positivos de personas racializadas en espacios de poder o reconocimiento.

10. Estrategias de resistencia y buenas prácticas

- Casos de buenas prácticas o iniciativas exitosas en inclusión: factores de éxito.
- Estrategias efectivas para combatir la discriminación y fomentar la inclusión.
- Iniciativas replicables en otras zonas rurales.

11. Políticas públicas y propuestas de acción

- Valoración de las políticas públicas actuales en el ámbito rural: efectividad y áreas de mejora.
- Propuestas para atender las realidades interculturales.
- Medidas efectivas para reducir la discriminación en comunidades rurales.

12. Cierre y reflexiones finales

- Aspectos clave no mencionados que deberían considerarse en la investigación.
- Reflexiones finales o comentarios adicionales.
- Agradecimiento por la participación y contribución a la investigación.

2. Guion entrevista a perfiles racializados (complementación)

1. Presentación y contextualización

- Presentación del entrevistado/a: lugar de origen, tiempo viviendo en la zona, ocupación actual.
- Experiencia en el ámbito laboral y social en la zona.
- Impresiones generales sobre la vida en el municipio o comarca.

2. Trayectoria migratoria

- Razones para migrar y proceso de llegada a la zona.
- Experiencias durante el viaje y el establecimiento en la comunidad.

- Situaciones de trato diferenciado o dificultades durante el proceso migratorio.
- Impacto de esas experiencias en la vida actual.
- Percepción de su proceso de regularización. Ley de Extranjería.

3. Experiencias en el ámbito rural

- Situaciones de trato diferenciado por origen, apariencia o cultura.
- Experiencias en el trabajo, la escuela u otros espacios relacionadas con el origen o características personales.
- Percepción sobre el trato hacia personas de otras culturas o países en la comunidad.

4. Acceso a la vivienda

- Experiencia al buscar vivienda en la zona.
- Situaciones de trato diferenciado durante la búsqueda de vivienda.
- Disponibilidad de opciones de vivienda para personas migrantes.

5. Relaciones y apoyo en la comunidad

- Sentimiento de pertenencia a la comunidad.
- Presencia de redes de apoyo: amigos, vecinos o personas que brindan ayuda.
- Participación en actividades o eventos comunitarios.
- Impacto de las relaciones sociales en la adaptación a la comunidad.

6. Oportunidades y participación en la comunidad

- Percepción sobre el acceso a oportunidades en la comunidad.
- Observación de diferencias en el acceso a recursos o apoyos.
- Sentimiento de inclusión y participación en la toma de decisiones comunitarias.

7. Trabajo y economía

- Experiencias al buscar trabajo en la zona.

- Condiciones laborales observadas o vividas.
- Tipos de trabajo donde se concentran personas racializadas
- Percepción sobre oportunidades para mejorar la situación económica.
- Comparativa rural-urbano.
- Comparativa con perfiles no-racializados.
- Percepción de si pueden acceder a otros tipos de trabajo.
- Percepción sobre la solicitud de ayudas económicas, trámites administrativos.

8. Educación y cultura

- Experiencia con el sistema educativo local (propia o de familiares).
- Percepción sobre el papel de la educación en la convivencia intercultural.
- Situaciones de trato diferenciado en el ámbito educativo o social relacionadas con la cultura o forma de hablar.

9. Reconocimiento y valoración

- Percepción sobre el respeto y valoración hacia personas de otras culturas en la comunidad.
- Conocimiento de personas migrantes con roles destacados en la comunidad.
- Opinión sobre cómo los medios de comunicación representan a las personas de otras culturas.

10. Soluciones y buenas prácticas

- Estrategias personales para enfrentar situaciones de trato diferenciado.
- Conocimiento de iniciativas que fomenten la integración de personas migrantes.
- Propuestas para mejorar la convivencia en la comunidad.

11. Políticas y propuestas

- Percepción sobre el papel de las autoridades en la integración de personas migrantes.
- Sugerencias para mejorar la convivencia y reducir el trato diferenciado.
- Mensaje que le gustaría transmitir a las autoridades locales o nacionales.

12. Cierre y agradecimiento

- Espacio para compartir cualquier otra experiencia o reflexión no mencionada.
- Expectativas o deseos para el futuro de la comunidad.
- Agradecimiento por la participación en la entrevista.

3. Guion Grupo de Discusión

1. Bienvenida y presentación

Objetivo: Crear un ambiente de confianza y explicar el propósito del grupo de discusión.

- Presentación del facilitador:
 - Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es [nombre], y hoy vamos a hablar sobre las experiencias de las personas racializadas en las zonas rurales.

2. Trayectoria migratoria y cambios en la percepción del racismo

Objetivo: Explorar en qué momentos de su recorrido migratorio han sentido mayor o menor discriminación.

- Preguntas detonantes:
 - ¿Podrían contarnos un poco sobre su trayectoria migratoria? (Por ejemplo, de dónde vinieron, por qué decidieron venir, cómo fue el proceso).
 - ¿En qué momentos de su trayectoria migratoria han sentido más discriminación? (Por ejemplo, en el viaje, al llegar a España, en trámites legales, etc.).
 - Comparando su experiencia en ciudades y zonas rurales, ¿dónde han sentido más discriminación o dificultades?
 - ¿Creen que su situación legal (permisos de trabajo, residencia, nacionalidad) ha influido en cómo los tratan?

3. Influencia de la profesión y el estatus socioeconómico en la discriminación

Objetivo: Identificar si el tipo de empleo o el estatus socioeconómico influye en la discriminación.

- Preguntas detonantes:
 - ¿Qué tipo de trabajos han tenido en su trayectoria migratoria? ¿Han sentido que su profesión influye en cómo los tratan?

- ¿Creen que hay diferencias en la discriminación según el tipo de trabajo que se hace? (Por ejemplo, en el campo, en el servicio doméstico, en trabajos más cualificados, etc.).
- ¿Han notado un cambio en cómo los tratan según han ido mejorando su situación laboral o económica?
- ¿Creen que las oportunidades económicas son iguales para las personas racializadas y no racializadas en esta comunidad?

4. Vivienda y acceso a recursos

Objetivo: Analizar las dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda y cómo influye en la discriminación y exclusión social.

- Preguntas detonantes:
 - ¿Cómo ha sido su experiencia buscando una vivienda en esta comunidad rural? ¿Tuvieron dificultades?
 - ¿Han sentido que les tratan diferente al buscar una vivienda por ser de otro país o por su color de piel?
 - ¿Han encontrado barreras relacionadas con su situación migratoria o económica al intentar alquilar o comprar una casa?
 - ¿Creen que las personas racializadas tienen más dificultades para encontrar vivienda en zonas rurales? ¿Por qué?
 - ¿La calidad de la vivienda que tienen o han tenido está relacionada con su situación económica o racial?

5. Rol de las ONG, asociaciones y entidades del tercer sector

Objetivo: Analizar el papel de las entidades sociales en la inclusión o en la lucha contra el racismo.

- Preguntas detonantes:
 - ¿Han recibido apoyo de ONG, asociaciones o colectivos en algún momento
 - de su trayectoria migratoria?
 - ¿Cómo valoran el papel de estas organizaciones en su proceso de integración?

- ¿Creen que las ONG realmente ayudan a reducir la discriminación o sienten que su impacto es limitado?
- ¿Qué tipo de apoyo han recibido o les gustaría recibir? (Por ejemplo, empleo, vivienda, formación, asesoramiento legal, etc.).
- En relación a la vivienda, ¿han recibido ayuda de alguna entidad para acceder a mejores condiciones o resolver conflictos?

6. Estrategias de resistencia y cambios necesarios

Objetivo: Identificar mecanismos de resistencia y propuestas de cambio en la lucha contra la discriminación.

- Preguntas detonantes:
 - ¿Cómo han enfrentado las situaciones de discriminación que han vivido, especialmente en temas relacionados con la vivienda?
 - ¿Han encontrado estrategias que les hayan ayudado a integrarse mejor en la comunidad rural?
 - ¿Qué cambios creen que deberían implementarse en políticas públicas o en la sociedad para mejorar la vida de las personas racializadas en el ámbito rural?
 - ¿Qué papel podrían tener las ONG y las asociaciones para mejorar la situación?
 - ¿Qué tipo de medidas deberían tomarse para garantizar el acceso a una vivienda digna para las personas racializadas en estas comunidades?

7. Cierre y reflexiones finales

Objetivo: Agradecer la participación y recoger comentarios adicionales.

- Preguntas de cierre:
 - ¿Les gustaría añadir algo que no hayamos mencionado?
 - ¿Cómo se han sentido en este espacio de discusión?

Agradecimiento:

- Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y opiniones. Su participación es muy valiosa para esta investigación.

